

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS**

JOSEP MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

*Jefe de Servicio Jurídico de Ordenación del Territorio*

*Departamento de Territorio e Infraestructuras. Consejo Insular de Mallorca*

**SUMARIO:** 1. Introducción. 2. Actividad legislativa y normativa. 2.1. Aprobada la Ley de cambio climático y transición energética. 2.2. Aprobada la Ley de residuos de las Islas Baleares. 2.3. Aprobada la Ley de caminos públicos. 2.4. Aprobada la nueva Ley agraria. 3. Política de paisaje. 3.1. Aprobación de la estrategia del paisaje de Mallorca. 3.2. El nuevo Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales aprobado en Mallorca, integra las políticas de paisaje. 4. Espacios naturales 4.1. Información pública en el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sa Albufera de Mallorca. 4.2. Cartografía de posidonia oceánica en las Islas Baleares. 4.3. La ampliación de Cabrera, un hito histórico que culmina una legislatura centrada en la protección del mar. 4.4. Exposición pública el Plan de Gestión de la Red Natura 2000 en Formentera. 4.5. El Gobierno establece la nueva reserva marina de Tagomago con una superficie de 3.756 hectáreas y una zona de reserva integral de pesca. 5. Otras políticas ambientales. 5.1. Impulso a las propuestas de la Iniciativa de Custodia del Territorio de las Islas Baleares. 5.2. Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio firman un protocolo de colaboración sobre la inspección y vigilancia de los espacios naturales protegidos. 5.3. Menorca recibe más 400.000 euros para proyectos de conservación del patrimonio natural y cultural con fondo de ITS.

## 1. INTRODUCCIÓN

Este primer semestre de 2019 hemos asistido al completado de las últimas leyes de carácter progresista de la legislatura, que incluyen importantes hitos medioambientales como el cambio climático, los residuos o el uso de los espacios naturales y agrarios. Ello nos llevará a recorrer las iniciativas relativas a la Ley de cambio climático y transición energética, la de la Ley de residuos de las Islas Baleares, la de la Ley de caminos públicos, así como la nueva Ley agraria.

Por otra parte, el paisaje ha entrado de nuevo en la agenda política, al menos en una parte del archipiélago, donde mejora la integración de esta variable en documentos programáticos y planes de carácter estratégico que abren el futuro a nuevas iniciativas que deberían incorporar la redacción de una Ley específica sobre la protección, ordenación y conservación del paisaje.

También se han culminado iniciativas de ampliación y mejora de espacios naturales protegidos, así como de diversos instrumentos de ordenación de estos. Estas iniciativas afecta espacios tan emblemáticos como el Archipiélago de Cabrera o Sa Albufera de Mallorca. También se han dado avances significativos en la protección de áreas marinas

Finalmente, el impulso a la Custodia del Territorio como mecanismo de implicación del sector privado y los particulares en iniciativas de conservación,

se está afianzando en nuestras islas, con el asentamiento de la colaboración de las administraciones públicas en el impulso de tales iniciativas.

Sobre todo, ello vamos a tratar en el número de este semestre.

## **2. ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y NORMATIVA**

### **2.1. Aprobada la Ley de cambio climático y transición energética**

El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado finalmente la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética (BOIB nº. 27 de 2019) que tiene una *vacatio legis* hasta el 2 de mayo de 2019. Esta ley surge de la extrema necesidad de plantear políticas enérgicas para hacer frente a un problema real que ha sido minimizado durante décadas, con aplazamientos e incumplimientos de los compromisos internacionales asumidos. No podemos olvidar que los estudios que indicaban la tendencia a un calentamiento global que repercutía en modificaciones sobre el clima del planeta, provenían de la década de 1980, lo que implicó que se incorporara a la agenda política el análisis y tratamiento de este calentamiento global. Es por eso que los resultados de las investigaciones con relación a las repercusiones del cambio climático condujeron a incluir dentro del programa de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) a la adopción de la Convención a Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). La ratificación posterior del Tratado y las conferencias de las partes para impulsar acuerdos internacionales para hacer frente a este desafío, han progresado muy lentamente, con incumplimientos sistemáticos de los Estados participantes en la convención. Con todo, una de las decisiones más importantes fue la adopción del Protocolo de Kioto, firmado en 1997, que marcaba, por primera vez, objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero para los países industrializados. La falta de consenso global y la ausencia de los principales países emisores de gases pusieron de manifiesto la insuficiencia de este acuerdo que ha evolucionado posteriormente con nuevas conferencias que van cerrando propuestas más próximas a la capacidad real de compromiso de las partes. Así, en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la UNFCCC se adoptó finalmente el Acuerdo de París de 2015, que incorpora el compromiso de reducir las emisiones de gases con efecto

de invernadero cuanto antes mejor con el objetivo de mantener el incremento de temperatura global por debajo de 2°C respecto de los niveles preindustriales. Las partes también se comprometieron a hacer un esfuerzo adicional para limitar el calentamiento de forma que no supere los 1,5°C.

La adopción de la Ley balear se inscribe en los compromisos adoptados y se adelanta en algunos aspectos a la Unión Europea y al Estado Español, con una iniciativa pionera que será, muy probablemente, imitada por otras comunidades autónomas y por el mismo Estado. La Ley se inspira en el principio de equidad con la finalidad de hacer realidad la asunción de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en función de las capacidades respectivas. Las Baleares, que ha disfrutado de un desarrollo económico sobre la base de un gran uso de los combustibles fósiles, deben dar un giro hacia la implantación de la descarbonización y la extensión de las energías renovables. Para hacer posible este objetivo, Baleares se propone llegar a las emisiones cero mucho antes del año 2050.

Como muy bien se afirma a la exposición de motivos de la Ley, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético suponen también una importante oportunidad económica y social. Como se ha visto, varios estudios demuestran el enorme potencial de creación de empleos asociados a esta transformación, así como una mayor competitividad vinculada a los menores costes energéticos y ambientales del nuevo modelo.

Las «Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todo el mundo» publicadas en el 2015 por la Organización Internacional del Trabajo, afirman que la ecologización de la economía puede actuar como un nuevo motor de crecimiento y como un generador neto de empleos dignos y verdes que pueden contribuir en gran medida a la erradicación de la pobreza y a la inclusión social, así como a una economía competitiva. La Ley, por lo tanto, también intenta establecer una serie de principios rectores para garantizar que la transición es justa y contribuye a cumplir los objetivos de inclusión social.

Se trata de una ley ambiciosa y extensa, cargada de medidas concretas y de aplicación directa. Sus VII títulos y 99 artículos (con el resto de disposiciones

adicionales y transitorias) comprenden contenidos que van desde el marco general del cambio climático y la transición energética pasando por la organización administrativa de la gestión de la problemática, hasta el régimen disciplinario regulador de los incumplimientos de las previsiones concretas de sus normas. La ley también prevé un paquete de planificación con el Plan de Transición Energética y Cambio Climático como eje principal, además de una serie de líneas estratégicas, la integración de la perspectiva climática en el conjunto de instrumentos de planificación territorial y urbanística (en especial en el Plan Director Sectorial Energético y los planes territoriales insulares), y el especial control ambiental de los planes y programas con relación a los objetivos de la Ley.

El título IV despliega las políticas energéticas con relación al objetivo de reducción de emisiones, de eficiencia energética, de energías renovables, la gestión de la demanda y la reducción progresiva de los combustibles fósiles. Tampoco olvida la Ley las políticas de movilidad y transporte, con la tendencia a las cero emisiones, ni las de sensibilización o ejemplificación, que implican a las administraciones públicas como motor del cambio.

Las medidas y los objetivos que determina la Ley se han previsto para un horizonte a medio y largo plazo. Es evidente que para alcanzarlos se requiere de los esfuerzos coordinados de los poderes públicos y los agentes privados, así como la implicación de toda la sociedad. El cambio de modelo que supone la aplicación de esta Ley implica que las medidas que contiene se tengan que asumir tanto desde el ámbito público, como el empresarial, social o particular para que efectivamente sea posible su eficacia.

Igualmente, según podemos leer en la exposición de motivos, esta Ley es la culminación de un amplio proceso de participación, con más de 2.000 personas implicadas entre empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares. También la tramitación parlamentaria ha contado con numerosas aportaciones, de los diferentes grupos parlamentarios.

El horizonte que fija la Ley es tener unas islas libres de combustibles fósiles y el 100% de energías renovables en el 2050. Para 2030 las previsiones son

disponer de un 35% de renovables, un 23% de reducción del consumo energético y una disminución del 40% de las emisiones contaminantes.

Se tiene que destacar que paralelamente a la aprobación de la Ley, el Gobierno de las Islas Baleares ha ido adoptando medidas que preparan nuestras Islas para llevar a cabo esta transición energética en condiciones.

## **2.2. Aprobada la Ley de residuos de las Islas Baleares**

El *Boletín Oficial de las Islas Baleares* número 23 de 21 de febrero de 2019, publicaba la esperada Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, que dota a la comunidad autónoma de un instrumento legislativo pionero y sin ejemplos comparados en otras autonomías. Se trata de una norma que va en la línea acordada, el pasado 18 de enero, por los 28 estados miembros en materia de gestión de residuos y que insta una política común para avanzar decididamente en la resolución de una problemática creciente.

Esta nueva norma regula toda la problemática de la gestión de residuos señalando desde el principio que el mejor residuo es el que no se produce. En este sentido, la reducción de los plásticos es uno de los objetivos principales. Así, a partir de 2021, no se podrán comercializar bolsas de plástico de un solo uso y sólo se permitirán compostables en establecimientos de venta a granel; las anillas de los paquetes de latas y botellas de bebidas sólo podrán ser biodegradables; las bandejas para alimentos, los vasos, los cubiertos, las pajillas para bebidas, los bastoncillos de las orejas, los bastoncillos para caramelos y los platos de plástico de un solo uso sólo se podrán comercializar si son compostables. El Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno de día 22 de junio de 2018 y entró en el registro del Parlamento día 2 de julio de 2018 (RGE 7154/2018). La tramitación siguió al retomarse el periodo de sesiones del otoño y el 21 de noviembre de 2018 se constituyó la ponencia dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. La ponencia redactó el correspondiente informe el día 18 de enero de 2019 y finalmente la Comisión votó y aprobó el dictamen el día 23 de enero de 2019.

La Ley de residuos ha sido aprobada con un gran consenso y después de un amplio proceso de participación durante el cual se han recibido más de 800

aportaciones. Hay que destacar que, antes de que haya sido aprobada, otras comunidades autónomas ya han mostrado interés en conocer el articulado.

Con respecto a su contenido, esta Ley de residuos y suelos contaminados se estructura en nueve títulos, seis disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Esta Ley contiene un total de ochenta artículos y siete anexos.

De conformidad con lo que podemos leer en la exposición de motivos, el título I contiene las disposiciones y los principios generales, el objeto y la finalidad de la Ley, y los principios que tienen que regir la planificación y la gestión de los residuos, como los de autosuficiencia y proximidad, la jerarquía, las acciones de sensibilización, la educación y concienciación, y la necesidad de la implementación progresiva del pago por generación, real y efectivo, a través de los precios públicos, tarifas y tasas.

En segundo lugar, el título II estructura el régimen competencial en materia de residuos partiendo de la situación actual y aportando claridad y seguridad jurídica. Se tiene que destacar la organización administrativa de la gestión que se adopta, de tal forma que el Gobierno de las Islas Baleares mantiene la competencia en planificación de residuos peligrosos, la de autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos, la de traslado de residuos y la potestad reglamentaria y de despliegue normativo en el ámbito regulado por esta Ley.

Por otro lado, los Consejos Insulares mantienen la competencia en planificación de residuos no peligrosos que ya están ejerciendo, el tratamiento insularizado y obligatorio de los residuos domésticos mezclados. Igualmente, los ayuntamientos se deben responsabilizar de la recogida y la vigilancia, la inspección y la sanción en el ámbito de los residuos domésticos. También la programación de la gestión se traslada a los Consejos Insulares.

Uno de los hitos de la Ley, es que se prohíbe la importación de residuos para tratarlos en instalaciones públicas de las Islas Baleares, de esta forma se cierra la polémica de anteriores legislaturas con respecto a la incineración de residuos importados de otros estados de la Unión Europea, que limitaban la capacidad de respuesta ante otras políticas activas a las Islas.

Con la aprobación de esta Ley, las Islas Baleares inician un cambio de modelo basado de consumo en la prevención y el fomento de la economía circular que requerirá la colaboración de las administraciones, las empresas y los ciudadanos. Todo, con el objetivo de asegurar el mantenimiento del medio ambiente y la sostenibilidad en un territorio tan frágil como son las Islas Baleares.

El título III persigue garantizar los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y establecer medidas adecuadas para llegar a alcanzarlos. Contiene medidas para la prevención, la reutilización y la disminución de la condición de peligrosidad de los residuos, reducción cualitativa y cuantitativa, así como para evitar el despilfarro alimenticio, reducir la generación de residuos de envases o garantizar la gestión efectiva.

Igualmente, el título IV se dedica a la futura creación del Ente de Residuos de las Islas Baleares, adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente, con personalidad jurídica propia y responsable de la ejecución del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos, de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno de las Islas Baleares.

Los títulos V y VI, dedicados a la regulación del régimen administrativo de la producción, la posesión y la gestión de residuos en las Islas Baleares, y en cuanto al régimen aplicable para determinados residuos, como los de construcción y demolición, los lodos de las aguas residuales urbanas o los vehículos fuera de uso, pretenden complementar y adecuar a la realidad y a los problemas de la Comunidad Autónoma las previsiones, más generales, de la normativa estatal.

Por otra parte, el título VII se dedica a los aspectos relativos al control de los suelos afectados por contaminación antrópica, a la declaración de suelos degradados y contaminados, a su registro y a los procedimientos para la recuperación.

En el título VIII se quiere dar la importancia que tiene que tener la información en materia de residuos., ya que considera primordial disponer de datos suficientes, contrastables y estandarizados, en los cuales la población tiene que tener acceso, permitirá un seguimiento real y efectivo de los planes de residuos



y un cumplimiento de los objetivos propios o pedidos por el Estado español o la Unión Europea.

Finalmente, el título IX, dividido en dos capítulos, se deja para regular los aspectos relativos al régimen de vigilancia, control e inspección de infracciones en materia de residuos y sancionador de la Ley.

Las disposiciones adicionales hacen referencia a los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley, la tramitación electrónica y los registros informáticos, la declaración de subproductos y el fin de la condición de residuo, las entidades colaboradoras, las licencias de actividades y el canon sobre el vertido y la incineración de residuos, que sólo se aplicaría en caso de no cumplir los objetivos, marcados por la Ley.

Las disposiciones transitorias se dirigen fundamentalmente a establecer plazos en el ámbito de la planificación, la tramitación electrónica, la recogida de nuevas fracciones de residuos, la adaptación de tributos, la regulación de centros de reciclaje y la planificación de los consejos insulares.

La disposición derogatoria única se refiere a un aspecto concreto de derogación normativa, y las dos disposiciones finales, a la habilitación para el despliegue reglamentario de la norma y a la entrada en vigor.

Los anexos establecen el contenido del Registro de producción y gestión de residuos de las Islas Baleares (anexo 1), el modelo de declaración responsable para el traslado de residuos (anexo 2), la documentación para adjuntar a la solicitud de autorización para instalaciones de gestión de residuos (anexo 3), la comunicación de transportista con carácter profesional (anexo 4), el contenido del Registro de suelos contaminados, de suelos degradados, de procesos de recuperación voluntaria y de declaración de suelo contaminado (anexo 5), los niveles genéricos de referencia para metales pesados en las Islas Baleares (anexo 6) y el modelo para la declaración de datos relativas a los residuos municipales (anexo 7).

La Ley de residuos ofrece a todos los actores implicados dos años para adaptarse. Con todo, hay que subrayar que muchos de estos actores, como

grandes cadenas de distribución de alimentos o administraciones municipales, ya toman medidas en la línea que marca el articulado.

Entrando en detalles que pueden destacarse, vemos que la ley contiene previsiones de los tipos que los cosméticos y dentífricos no podrán contener microplásticos o nanoplásticos; se tendrán que comercializar las versiones reutilizables de mecheros, cartuchos y tóneres de impresora y fotocopiadora; las cápsulas de un solo uso de café, infusiones, caldos y otros utilizadas en cafeteras se tendrán que fabricar con materiales compostables o bien tendrán que ser fácilmente reciclables. En todo caso, estarán sometidas a responsabilidad ampliada del productor.

También en la línea de prevenir la excesiva generación de residuos de envases, se promoverá la instalación de fuentes de agua potable o el suministro en envases reutilizables y no se podrán distribuir bebidas en envases de un solo uso a las instituciones públicas. Además, la Ley también establece que los establecimientos de hostelería y restauración siempre ofrecerán a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada apta para el consumo humano, de manera gratuita y complementaria.

En los acontecimientos públicos que cuenten con apoyo de las administraciones públicas, se tendrán que implantar alternativas en venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso. Aunque la reducción de los plásticos es uno de los principales objetivos, la Ley también regula otros tipos de residuos. Así, por ejemplo, las toallitas húmedas deberán incorporar información sobre los efectos de estas sobre el medio ambiente; las ordenanzas municipales tendrán que incorporar medidas de prevención y minimización del abandono de residuos en las playas, como las colillas de tabaco.

En materia de reciclaje, se marcan objetivos claros. En el 2021 los municipios tendrán que alcanzar el 50% de reciclaje en materiales como papel, metales, vidrio plástico y bio-residuos de los residuos domésticos. El año 2030 esta cifra tendrá que llegar al 65%. Con respecto a los envases, se tendrán que reciclar el 75% antes del 2030.

Hay que subrayar que, en todo caso, se aplicarán métodos que aseguren que se cumple uno de los principios fundamentales de la Ley: “quien más contamina,

más paga”. Con todo, no sólo hay que fomentar el reciclaje para reducir la cantidad de residuos y, por lo tanto, la Ley también prevé objetivos en materia de reutilización. Por ejemplo, en el 2025 un 3% de los residuos domésticos gestionados se tienen que preparar para reutilizarse. En este sentido, hay que destacar que dentro de la tramitación parlamentaria se ha incorporado un objetivo de reutilización de los envases de bebidas para el 2030.

Finalmente se adoptan medidas para reducir el despilfarro alimenticio con el objetivo que en el 2030 este se reduzca a la mitad con relación al 2020.

Como se ha comentado, una vez entre en vigor la normativa, quedará prohibida la importación de residuos en plantas públicas de las Islas Baleares. Además, no se podrá incinerar ni verter ningún tipo de residuos sin que antes haya habido un pretratamiento.

### **2.3. Aprobada la Ley de caminos públicos**

El Parlamento de las Islas Baleares aprobó a finales de diciembre la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca, una ley que prevé la creación de una red de caminos –preferiblemente sin asfaltar– que conecte todos los pueblos de Mallorca y también los de Menorca y recupere vías que, a pesar de ser públicas, se cerraron hace décadas y se han dejado de utilizar; todo ello motivado por el hecho de que los caminos tienen que ser considerados un patrimonio de todo el mundo y que a todo el mundo tiene que poder disfrutar. Según se resume a la exposición de motivos, esta ley da respuesta a la necesidad de establecer un régimen jurídico para los caminos públicos con el fin de poder recuperarlos y promover el uso y su defensa. Asimismo, proporciona un marco legal para rutas de interés senderista existentes y abre la posibilidad de poder crear nuevas.

El objeto de esta iniciativa legislativa es establecer el régimen jurídico de los caminos públicos de Mallorca y Menorca. Este régimen se extiende a todas las cuestiones relacionadas con la planificación, proyección, financiación, construcción, modificación, conservación, explotación, uso y defensa de los caminos públicos. Igualmente, se quiere garantizar la integración correcta de los caminos en el entorno.

También es objeto de esta iniciativa los aspectos relativos a las rutas de interés excursionista y su selección, ordenación, protección, señalización y homologación como rutas senderistas, además de la integración en el Registro de rutas senderistas.

Con respecto a su contenido, este se estructura en cuatro títulos articulados entorno al régimen de los caminos públicos y los mecanismos de garantía del mantenimiento de la red.

Así, el título I recoge el objeto de la ley, es decir el régimen jurídico de los caminos públicos y las rutas de interés excursionista, e incorpora los principios generales, que se pueden resumir en la defensa y conservación del patrimonio viario de Mallorca, potenciando el uso responsable por parte de la ciudadanía como medio más próximo para acceder al entorno rural.

El título II establece el régimen jurídico de los caminos públicos. En este sentido se menciona que “con respecto a la noción de camino público, se parte de un concepto que, atendiendo a la realidad, abarca cualquier tipología de camino que no sólo incluye la vía de comunicación en ella misma, sino también los elementos que –siendo igualmente de dominio público- les son inherentes para su finalidad, como los pozos, los abrevaderos, los márgenes etc. También se establece una zona de protección, como ya implanta la legislación de carreteras, de 3 metros a cada lado del camino.

Con relación al contenido del Título III, éste regula el senderismo como manera de acceder al medio ambiente y a la naturaleza y establece la prohibición de crear nuevas rutas senderistas al margen de las establecidas de acuerdo con la Proposición de ley. Finalmente, el título se completa con las condiciones que pueden permitir cancelar las homologaciones obtenidas, así como las normas relativas a la conservación y la señalización de las rutas senderistas.

El Título IV, por otra parte, implanta el régimen de las infracciones y sanciones, con la graduación de leve, grave y muy grave, y con unas multas que pueden ir de un mínimo de 60 euros hasta los 20.000 euros para las infracciones más graves. También se establece un régimen adecuado de prescripciones de la infracción, que va desde el año para las leves, los dos años para las graves y los tres años para las más graves.

La ley concluye con un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias y finales. En las disposiciones adicionales se destaca la regulación de los planes especiales de ordenación territorial mediante la modificación de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial. Estos planes se configuran como instrumentos de ordenación territorial en despliegue de las determinaciones del Plan Territorial Insular y de los Planes Directores Sectoriales o también como instrumentos de planeamiento autónomo, cuando así lo prevea expresamente una normativa sectorial. También son objeto de regulación los antiguos trazados de líneas ferroviarias desafectadas, así como la creación de los planes de vías ciclistas.

Por otra parte, contempla la elaboración de diferentes catálogos de caminos que darán información y ofrecerán un control de los caminos públicos. Tanto los municipales como los insulares tienen un plazo máximo de aprobación de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.

También se pondrá en marcha un registro insular de caminos públicos que estará disponible para consultas y será accesible telemáticamente a través de un visor que será actualizado de manera continua.

Hay que destacar la creación de un instrumento nuevo de ordenación: el Plan director sectorial de caminos. Esta es una de las figuras claves de la ley que define una red supramunicipal, un sistema complementario en la red de carreteras, pero para medios no motorizados. Concretamente, el Plan contemplará la normativa de aplicación y ordenanzas de uso, planos informativos, de ordenación y de actuación.

Con respecto a los principales efectos contemplados por la ley, con relación a la ordenación de los caminos, tenemos la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para su ejecución, así como el deber del Consejo de Mallorca y de Menorca de garantizar la ejecución del Plan Director Sectorial y de los planes especiales de caminos mediante los correspondientes estudios económicos y financieros.

En cuanto a los usos, la ley determina que los caminos tienen que ser de acceso libre y gratuito y que están destinados al tráfico no motorizado. Además, los usos

y aprovechamientos diferentes al derecho de circulación o tráfico necesitarán autorización previa de la administración titular del camino.

Otro capítulo de la normativa también estará dedicado a la pavimentación de los caminos, y determina que en carácter general los caminos de acceso en el medio natural y paisajístico no se pueden pavimentar y si se tuviera que pavimentar por razones imperiosas se tendrá que tramitar la correspondiente declaración de Interés General.

Asimismo, y con el objetivo de crear mayor homogeneidad, se contempla la elaboración de un manual de señales con la finalidad de que todas sigan la misma pauta por toda la isla.

Pero aparte de los caminos públicos, esta ley también hace referencia a las rutas senderistas con el objetivo de recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional y su entorno, así como facilitar la práctica de este deporte. Es la primera vez, en el caso de la Comunidad Autónoma, que se presenta una ley para regular tales rutas y protegerlas.

Así, debe destacarse esta atribución competencial para crear y gestionar una red de rutas senderistas y vigilar, conservar, señalizar y mantener rutas de ámbito supramunicipal. En el caso de Menorca, la ley preserva las especificidades de la vigente normativa del Camino de Caballos.

Finalmente, la ley también incluye una serie de infracciones que se califican de muy graves, graves y leves y que pueden suponer sanciones de entre 60 euros hasta los 20.000 euros. Además, la norma también incluye la obligación de restituir las cosas conforme a su estado anterior con cargo al infractor y de resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.

#### **2.4. Aprobada la nueva Ley agraria**

En el *Boletín Oficial de las Islas Baleares* número 18 de día 9 de febrero de 2019, se publicaba la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, una normativa que se presenta como un texto más agrícola y menos urbanístico que el anterior, de manera tal que prioriza la producción de alimentos para garantizar la soberanía alimenticia de las Islas Baleares en el siglo XXI. Esta reforma recupera así, respecto de la norma anterior, la agricultura en detrimento del

urbanismo. En este sentido, el espíritu de la Ley pretende garantizar la continuidad de la actividad agraria y la producción de alimentos en las Islas Baleares mejorando las rentas de los campesinos y protegiendo los recursos que necesitan para llevar a cabo su tarea.

Una de las principales novedades de esta Ley reside en la redefinición de la figura del campesino: se da una especial importancia a su actividad no sólo como generador de alimentos sino también como protagonista de una actividad que configura y preserva el paisaje. Este último aspecto se reconoce con dos nuevas figuras: el contrato territorial y el parque agrario. La primera va dirigida al objetivo de conservación, y consiste en cubrir los costes que representa para los agricultores la generación de toda una serie de externalidades sociales y ambientales positivas para el paisaje (mantenimiento de las paredes de piedra en seco y de los bancales y márgenes, dinamización de otros sectores económicos, etc.). Con respecto al parque agrario, se trata de una figura que ordena y potencia los espacios de interés agrario de las zonas periurbanas como, por ejemplo, el Pla de Sant Jordi, en Palma. Además, por primera vez, se abre la posibilidad de que se pueda exigir a quien genere presión sobre suelo rústico, haciendo un uso atípico de mismo, que compense el sector agrario con estos dos instrumentos.

Partiendo de esta idea, la Ley agraria establece una nueva figura de protección para el suelo rústico: las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), tierras especialmente ricas para la agricultura que se instauran como espacio de uso exclusivo para el sector agrario, que tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas.

Finalmente, el texto establece que serán los consejos insulares, con la participación de representantes agrarios, los encargados de delimitarlas en un plazo máximo de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. Pasado este plazo, y sólo en caso de que no se haya completado la delimitación, ésta la podrá hacer la consejería competente en materia de Agricultura. Hasta que los consejos delimiten las ZAVA, hará falta un informe de la Dirección General de Agricultura para llevar a cabo usos y/o edificaciones no agrarias en las Áreas de Especial Interés Agrario (AIA). Estas son algunas de las novedades que han introducido los grupos parlamentarios durante el trámite de ponencia, con

relación al Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno en junio de 2018.

Igualmente, se ha modificado el régimen de las denominadas agroestancias. En la ponencia, se ha suprimido el límite de seis meses el año para practicar esta actividad complementaria y se ha ampliado la posibilidad de ofrecer alojamiento en una vivienda de la explotación diferente a la residencia del agricultor. Se mantiene, sin embargo, que el campesino deba residir a la misma explotación. Además, los interesados ya no tendrán que cumplir todos los requisitos que marca la Ley turística, aunque deberán comprar las plazas correspondientes, a las que se asignará una categoría específica y un precio más reducido al resto de plazas turísticas previstas en la legislación correspondiente.

Se trata de una actividad complementaria que, a fin de que no se convierta en sustitutoria de la agraria (como actividad principal y exclusiva), sólo la podrán llevar a cabo las explotaciones preferentes, profesionales y prioritarias. Precisamente, la definición de preferentes se adapta a la realidad de cada isla y al tipo de cultivo con respecto a la extensión, hecho que posibilita que más explotaciones puedan alcanzar esta consideración que con la redacción prevista en la anterior Ley agraria.

En cambio, la venta directa, la degustación del producto propio y la primera transformación se pueden llevar a cabo a cualquier tipo de explotación. Y es que una de las prioridades que se marca la Ley es garantizar la soberanía alimenticia.

Se fomenta también la venta de proximidad y se establece que en la compra pública se dará prioridad a los productos de calidad diferenciada, de venta de proximidad, frescos y de temporada, lo que supone un avance importante respecto de la Ley de 2014 que sólo hacía mención de la cuestión sin apenas desarrollo.

Por primera vez, además, se incluye en una ley de estas características, una relación de derechos y deberes de los propietarios de suelo rústico en materia de sanidad vegetal. Se quiere evitar que la falta de atenciones a las explotaciones pueda representar un foco de infección para las producciones agrarias, como en el caso de la *Xylella fastidiosa*. Por eso se ofrecen herramientas para facilitar este mantenimiento, como los bancos de tierras, de



manera que el dueño de la tierra y el campesino puedan ponerse en contacto entre ellos a través de la Administración, que velará por los intereses de ambas partes.

Por otra parte, toda la ganadería se considera una actividad agraria estratégica, independientemente de la especie (para la ley anterior sólo lo eran los équidos).

Con respecto a la producción agraria, se reconoce la importancia de las razas autóctonas y las variedades vegetales locales también como patrimonio genético de las Islas Baleares. Por este motivo, se crea el Catálogo de variedades locales y se fomenta la siembra de estas variedades. También se prohíbe sembrar organismos modificados genéticamente (transgénicos), atendiendo la directiva europea.

Asimismo, esta nueva Ley agraria da más importancia a los aspectos sociales del sector agrícola, mediante la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal. En este sentido, hay que destacar la elaboración de un Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector primario. Además, se reconoce el cooperativismo como dinamizador y estructurador del sector profesional y de la agricultura familiar, así como el papel que tiene en la garantía del relevo generacional.

En el ámbito de la participación, se apodera el Consejo Agrario Interinsular para que se auto-regule, y en el del conocimiento se crea la Estrategia Balear de Mejora de Conocimiento Agrario, la cual tiene que contener las directrices y los planes de actuación sobre esta materia, que las administraciones públicas tienen que seguir a lo largo de un determinado periodo.

### **3. POLÍTICA DE PAISAJE**

#### **3.1. Aprobación de la estrategia del paisaje de Mallorca**

El *Boletín Oficial de las Islas Baleares* número 035 de día 16 de marzo de 2019, publica el acuerdo de aprobación de la Estrategia del paisaje del Consejo de Mallorca en ejecución del Convenio Europeo del Paisaje y del Plan Territorial Insular

Debemos recordar que el Convenio Europeo del Paisaje (CEP/2000), adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de julio de 2000, se abrió a la firma de las Partes en Florencia, el 20 de octubre de 2000, en el marco de la campaña del Consejo de Europa encabezada por el lema “Europa, un patrimonio común” y entró en vigor el día 1 de marzo de 2004, después de que diez Estados miembros del Consejo de Europa expresaran su consentimiento a vincularse al documento. España lo ratificó el mes de noviembre de 2007, habiendo entrado en vigor en nuestro país el primero de marzo de 2008.

El Convenio Europeo del Paisaje, reconoce el principio de subsidiariedad y el de la autonomía local. Es por eso que el documento insta a los estados signatarios a implicar las administraciones locales y regionales en la concreción e implantación de políticas de paisaje, la identificación y calificación de los paisajes y también en la definición de objetivos de calidad paisajística. Con todo eso se pretende reforzar el compromiso institucional en materia de paisaje y se realiza una adaptación progresiva, pero sustancial, desde un punto de vista técnico, administrativo y normativo.

Dentro de esta línea de implantación de políticas de paisaje, el Consejo Insular de Mallorca, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de día 4 de febrero de 2008, se adhirió a «los principios, los objetivos y las medidas contenidas en el Convenio Europeo del Paisaje», integrándose, además, en la Red Europea de Poderes Locales y Regionales para la Aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELC). Como aportación al debate sobre la necesidad de implantar políticas de paisaje en Mallorca, el Consejo Insular publicó el documento “Bases para una estrategia de paisaje de Mallorca” en desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje. Este documento contenía las bases para una estrategia o plan de paisaje de la isla de Mallorca, estrategia que se formulaba desde el Departamento de Territorio del Consejo de Mallorca, en el ámbito de las competencias del Consejo Insular.

Desde aquel momento el Consejo de Mallorca impulsó diferentes políticas de paisaje, de una parte, con la tramitación y posterior reconocimiento de la Sierra de Tramuntana dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, dentro de la categoría de paisaje cultural, de otro lado con la incorporación de la variable paisajística como elemento integrador y transversal de la intervención

administrativa en el territorio mediante la modificación número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca.

La Estrategia de Paisaje contempla la incorporación y promoción del carácter y los valores del paisaje en las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y, en general, en proyectos e iniciativas de promoción e innovación económica relacionados con los recursos locales, la artesanía y los saberes y las actividades productivas tradicionales. De hecho, el departamento de Economía y Hacienda de la institución tiene un programa de promoción económica y artesanías. Otros ejemplos, como el Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, favorecen el impulso en la conservación y gestión de elementos y componentes valiosos del paisaje rural a través de proyectos subvencionables.

Además de eso, otra directriz planteada es la promoción de la figura del parque agrario, además del fomento de la función productiva económicamente viable, la gestión y activación del paisaje y su interpretación, asociada a la alimentación de calidad y proximidad. Esta iniciativa va en consonancia con las previsiones de la reciente Ley agraria. Por otra parte, aunque concebida con otra función, la normativa del Plan Territorial Insular de Mallorca recoge la figura de Parque periurbano en torno a la ciudad de Palma que podría constituir el germen de iniciativas como las propuestas al documento.

En este contexto, el Consejo Insular de Mallorca desea promover y desarrollar una estrategia específica y coordinada para la salvaguardia de los valores paisajísticos, la gestión de los procesos de cambio territorial respetuosa e integrada en el carácter de los paisajes.

Este proyecto es muy singular en España. De hecho, sólo las comunidades de Andalucía y, con un carácter mucho menos ambicioso, Murcia y Galicia, tienen un modelo de estrategia de paisaje.

### **3.2. El nuevo Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales aprobado en Mallorca, integra las políticas de paisaje**

El Pleno del Consejo insular de Mallorca de día 1 de abril de 2019 ha aprobado el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA).

Este plan de ordenación territorial de la implantación comercial ha integrado la variable del paisaje, tanto urbano como rural, en sus previsiones, con la finalidad de armonizar mejor la implantación de los nuevos equipamientos comerciales y mejorar la integración paisajística de los existentes.

Así, por una parte, se establecen los condicionantes territoriales de la implantación de los equipamientos comerciales según las características del suelo, la aptitud demográfica y los condicionantes territoriales, incluidos los relativos a las infraestructuras existentes y su nivel de servicio.

Por otra parte, se destina un capítulo completo a las condiciones de implantación y de integración de los equipamientos, con mecanismos de identificación de impactos y externalidades y la necesidad de evaluar tales impactos. Igualmente, la variable del paisaje se incorpora como elemento transversal en toda la regulación articulada, con la finalidad de dar acogida a las previsiones de la Estrategia del Paisaje del Consejo de Mallorca.

#### **4. ESPACIOS NATURALES**

##### **4.1. Información pública en el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sa Albufera de Mallorca**

Sa Albufera de Mallorca es la zona húmeda más extensa de las islas Baleares y, en 1988, se convirtió en el primer Parque Natural del archipiélago. Hasta el año siguiente no se aprobó la Ley 4/1989 que instaura los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) lo que ha motivado que históricamente Sa Albufera nunca haya tenido ninguno. No obstante, y a pesar de ser el espacio protegido con más experiencia de gestión de las Islas Baleares, el paso de los años y la presión externa hacen cada vez más necesaria la redacción y aprobación de este documento de ordenación.

El proyecto de PORN de Sa Albufera prevé la ampliación, en un 20%, de la superficie del Parque Natural. Más concretamente, prevé una ampliación del Parque de 417 ha, que, sumadas a las actuales, comportarán un total de 2059 ha, e incorpora, por primera vez en las Islas Baleares, una Zona Periférica de Protección (ZPP), así como corredores ecológicos que quedarán regulados en el PORN. Estas zonas, sin embargo, no formarán parte del Parque Natural.

El PORN intenta responder a los grandes desafíos que a los que debe enfrentarse Sa Albufera, en el siglo XXI. El principal, según coinciden todos los estudios que se han realizado, es la salinización creciente. Es por eso que el PORN prevé la ampliación del Parque Natural, incorporando amplias superficies contiguas de zona húmeda, en gran parte parcelas abandonadas. De esta manera, los límites del Parque Natural coincidirán con la zona húmeda real. También se incorporan la zona de Son Bosc, un objetivo que se ha perseguido desde casi la misma declaración del Parque Natural, y la Playa del Comú, una medida fundamental para restaurar el sistema playa-duna, un ecosistema frágil, degradado y excepcional. Hasta ahora, sólo había protegido el sistema dunar.

Toda la zona ampliada quedará bajo la figura de uso compatible. Así pues, los objetivos de conservación ambiental serán compatibles con el mantenimiento de los usos agrarios, forestales, ganaderos y cinegéticos, así como con ciertas infraestructuras y usos recreativos. La playa tendrá la catalogación de uso limitado admitiendo el uso público, siempre que sea compatible con la conservación del espacio natural.

Por otra parte, el borrador de PORN de Sa Albufera considera ZEP las zonas de banales en los marjales de Muro y de Sa Pobla con un cierto uso agrario; las principales acequias en los marjales mencionadas que alimentan la zona húmeda; una franja de sistema dunar que rodea las Casetes dels Capellans, y las balsas de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Muro-Santa Margalida.

Todas estas zonas ZPP tienen como función fundamental la constitución de un espacio de protección del espacio natural protegido, así como la conservación y control de ambientes rurales próximos. Es por eso que los principales usos a fomentar a las ZPP serán: protección y mantenimiento de acequias y sangraderas que alimentan la zona húmeda; protección de pequeñas cuencas que llegan a la zona húmeda; usos agrícolas, ganaderos y cinegéticos compatibles con la conservación o su recuperación; conservación y gestión de fauna, flora, hábitats, ecosistemas y patrimonio; restauración de ecosistemas y mejora de hábitats.

Por su parte, los corredores ecológicos son los espacios necesarios para conseguir la conectividad ecológica del territorio, en particular entre los espacios protegidos por la Red Natura 2000 y aquellos con una relevancia singular para la biodiversidad. Tienen un carácter prioritario los cursos fluviales. Así, el borrador del PORN considera corredores ecológicos la serie de estanques, zonas húmedas y las conexiones entre estas y también con el mar, conectados con se Albufera, con interés ecológico independientemente del grado de degradación o artificialización que tienen. Asimismo, se consideran corredores ecológicos el lecho y los márgenes de los tramos finales de los principales torrentes que llegan a la zona húmeda.

Estas zonas tienen como función fundamental la protección de una serie de zonas húmedas próximas con cierto grado de degradación pero que forman parte de los desplazamientos habituales de ciertas especies de fauna, especialmente pájaros y peces. Los principales usos que fomentar en los corredores ecológicos serán los siguientes: protección de zonas húmedas próximas que, sin estar integradas en el espacio natural protegido, están relacionadas.; protección y mantenimiento de torrentes, acequias y sangraderas que alimentan la zona húmeda; Conservación y gestión de fauna, flora, hábitats y ecosistemas, restauración de ecosistemas y mejora de hábitats; observación y disfrute de la naturaleza, interpretación y educación ambiental.

La redacción del PORN y la ampliación que se prevé en el borrador es, por lo tanto, un hito indispensable para conseguir la pervivencia futura de esta zona húmeda y, al mismo tiempo, asegurar la preservación de los hábitats y especies. Finalmente, la propuesta de PORN intentará garantizar la pervivencia de aquellas actividades tradicionales relacionadas con agricultura, ganadería y caza compatibles con los objetivos de conservación y que podrán ejercerse en las zonas ampliadas y en las ZEP.

#### **4.2. Cartografía de posidonia oceánica en las Islas Baleares**

El Gobierno de la CAIB ha iniciado los trabajos de cartografía de detalle de las praderas de posidonia con la finalidad de dotar de una mayor efectividad práctica el Decreto que la protege. Se trata de una cartografía detallada de las praderas que se encuentren en las zonas LIC de Baleares. En una primera fase se

procede a la elaboración de la cartografía de varias zonas declaradas LIC de Mallorca y parte de Menorca; en una fase posterior se completará la cartografía de varias zonas declaradas LIC en las áreas restantes de Menorca, así como la de las islas de Ibiza y Formentera.

Las técnicas utilizadas permitirán una gran precisión a la cartografía, mediante el Sidescan sónar para profundidades comprendidas entre 5 y 40 metros e interpretación de ortofotos recientes para fondos sucintos, entre 0 y 5 metros. A ello se le añade un sistema de vídeo para la captación simultánea de imágenes del fondo, con lo que se pretende un análisis de la total cobertura del fondo. Tanto en el caso del uso de ortofotos como en el caso del uso del Sidescan sónar, las posteriores interpretaciones se contrastan adecuadamente con verificaciones in situ. El posicionamiento en x-y se realiza mediante GPS diferencial, además del uso de un ecosonda.

En la fase de cartografía se distinguen como mínimo las unidades siguientes, subunidades o facies: praderas de Posidonia oceánica, y entre ellas varias tipologías (orientativamente: prados con cubetas, prados continuos o muy densos, prados continuos y poco densos, prados discontinuos, manchas aisladas con canales entre matas, etc.); la mata muerta de Posidonia oceánica; otros prados, en particular de Cymodocea nodosa; fondos sedimentarios sin cubierta biológica, con distinción hasta donde es posible de las grandes unidades sedimentarias; fondo o afloramientos rocosos; y fondo de maërl.

Finalmente, estos trabajos de cartografía también permitirán explotar otras interesantes aplicaciones, como la detección de arrecifes artificiales, marcas de arrastre, señales de extracción de áridos, canales o conducciones, estructuras para el fondeo de embarcaciones, etcétera.

#### **4.3. La ampliación de Cabrera, un hito histórico que culmina una legislatura centrada en la protección del mar**

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el acuerdo por el cual se amplían los límites del Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, incorporando 80.779 nuevas hectáreas de espacios marinos confrontantes. De esta manera, la superficie total

del parque pasa de las 10.021 hectáreas actuales a las 90.800, convirtiéndose en el mayor parque nacional marino del Mediterráneo occidental.

Este parque nacional, declarado en 1991, se encuentra situado en el sur de Mallorca y lo componen una isla principal, Cabrera Mayor y 18 islas menores, de las cuales la Illa dels Conills es la más importante. Como consecuencia de la ampliación, la superficie marina de la Red de Parques Nacionales pasa de un 4 a un 23% y el Archipiélago de Cabrera se convierte en el mayor parque nacional de España, incluyendo los terrestres.

Después de la incorporación de estas nuevas 80.779 hectáreas el parque nacional incluirá una muy buena representación de 12 de los 13 sistemas naturales marinos que, de acuerdo con la Ley de Parques Nacionales, tienen que estar presentes en la Red. Únicamente faltarían para representar los sistemas asociados a emanaciones gaseosas submarinas.

El nuevo parque ampliado incorporará por primera vez el mar abierto a la red de parques nacionales, aunque no aguas exteriores, que ya existían en el parque nacional antes de esta última ampliación. Con ello se pasa a cubrir un rango de profundidades de más de 2.000 metros, con lo que se protege una variedad de hábitats singulares y amenazados del Mediterráneo considerados de especial valor, así como sus paisajes marinos asociados.

Así, la zona de ampliación aporta una importante representación de dos sistemas naturales todavía no presentes en la Red de Parques Nacionales (áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes pescados migradores y bancos de corales profundos) y mejora sustancialmente la representatividad de otras dos (veriles y escarpes de pendiente pronunciada y bajos rocosos). Con estos sistemas naturales y su biodiversidad asociada, la Red de Parques Nacionales mejorará sustancialmente su riqueza y representatividad marina.

Asimismo, la zona ampliada aportará importantes áreas de alimentación para uno de los elementos de la fauna más representativos del actual parque nacional, como son los pájaros marinos, el grupo más amenazado de la avifauna a nivel global. Paíños, mergos, gaviotas y pardelas (la pardela balear es el pájaro más amenazado de Europa), especies en algunos casos catalogadas en peligro



de extinción, se beneficiarán de la protección de los recursos pesqueros aportada por el parque, evitándose a más capturas accidentales en artes de pesca.

En cuanto a los cetáceos y las grandes especies de peces, la zona se constituye en un auténtico santuario, especialmente importante para delfines, cachalotes, rorcuales, escualos, pez espada y atún rojo. El área objeto de ampliación se incluye en la zona de reproducción más importante para esta última especie de todo el Mediterráneo.

El hecho de que el nuevo parque ampliado incorpore por primera vez el mar abierto a la red de parques nacionales obligará a adoptar medidas pioneras de gestión y conservación del medio marino como Parque Nacional que, en tanto que Espacio Natural Protegido, corresponde íntegramente su aplicación a la Comunidad Autónoma, conforme a la reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional.

La propuesta de ampliación ha contado con un amplio consenso social, recibiendo un apoyo unánime en el seno del Patronato del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. También ha contado con un numeroso apoyo según consta en los estudios de opinión realizados el año 2017, que mostraron una aceptación social muy amplia en las Islas Baleares. A nivel nacional, el Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría una Proposición No de Ley con fecha de 20 de junio 2017, que recogía también esta ampliación. Asimismo, la propuesta ha sido sometida al trámite de información pública durante dos meses y ha sido informada por el Consejo de la Red de Parques Nacionales en su reunión el mes de diciembre pasado de 2018.

#### **4.4. Exposición pública del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 en Formentera**

El Plan de Gestión de la Red Natura 2000 de Formentera, se ha sometido a exposición pública dentro del proceso que se está realizando para dotar de los correspondientes instrumentos de gestión a todos los espacios incorporados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a la Red.

En el caso de la isla de Formentera, las zonas protegidas como LIC o ZEPA suman un total de 8.518 hectáreas repartidas en cinco espacios tres de ámbito marino y dos de ámbitos mixtos. De ellos, tres comprenden Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de ámbito exclusivamente marino: Cala Saona, Tramontana y Migjorn. Los otros dos -Cap de Barbaria y la Mola- son de ámbito terrestre y marino y están considerados LIC y Zonas de Especial Protección para los Pájaros, ZEPA. Actualmente, sólo los LIC y ZEPA de la Mola y de Cap de Barbaria disponen de un instrumento de gestión parcial. Una vez se apruebe el Plan de Gestión, los cinco espacios se incorporarán a la Red con la categoría de Zona de Especial Conservación (ZEC).

El Plan, recoge los valores ecológicos y ecosistémicos presentes. Por una parte, describe los hábitats y especies que lo hicieron merecedor de formar parte de la principal red europea de protección natural. De la otra, precisa su estado de conservación y define las amenazas y presiones a los que se ven sometidos. Dentro del espacio Red Natura 2000 en Formentera se ha contrastado la presencia de 12 tipos de hábitats de interés comunitario. De ellos, cinco están considerados de interés prioritario, como las praderas de posidonia, que ocupan el 30,14 por ciento de la superficie incluida dentro del Plan de Gestión. El plan incluye también las medidas de financiación correspondientes.

#### **4.5. El Gobierno establece la nueva reserva marina de Tagomago con una superficie de 3.756 hectáreas y una zona de reserva integral de pesca**

El Consejo de Gobierno aprobó el 14 de diciembre el Decreto por el cual se establece la reserva marina de la costa nordeste de Ibiza-Tagomago. La nueva reserva marina comprende 3.756 hectáreas, entre la Punta des Jonc, Sa Argamasa y las aguas interiores que limitan con el islote de Tagomago. Esta área marina presenta un valor ecológico y pesquero considerable. La creación de la nueva reserva producirá un incremento sustancial de las poblaciones de peces comerciales dentro de los límites y los alrededores de esta. Eso favorecerá el sector pesquero artesanal de Ibiza y las actividades económicas relacionadas con la observación de peces y la pesca recreativa de superficie.

En este sentido, hay que recordar que la iniciativa de crear una reserva marina en la zona surge a iniciativa de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, que contó

con el apoyo del Consejo Insular. La institución encomendó un estudio científico que confirmó que el área que ahora se protege tiene una importancia capital para la flota de artes menores de Ibiza e incluye una serie de “puntos calientes” de biodiversidad marina donde coinciden la actividad pesquera profesional, la recreativa y otras actividades económicas, en particular el buceo turístico.

El estudio científico señala también que las capturas de pescas experimentales son significativamente más bajas que las de la reserva marina de los Freos de Ibiza y Formentera, aunque las localidades muestreadas presentan características ambientales similares. Con el fin de recuperar poblaciones de peces próximas a las potenciales, resulta necesario regular las actividades que se practican para garantizar la conservación de la riqueza biológica y de los recursos marinos vivos.

Por otra parte, los estudios destacan que el área a proteger contiene una gran diversidad de comunidades de algas, así como importantes praderas de posidonia que, ligado a la estructura del fondo marino, hacen que esta tenga unas posibilidades de recuperación realmente estimulantes.

Dentro de la reserva marina se establece una zona de reserva integral, sin ningún tipo de pesca, en un área de 250 ha en torno a la losa del Higueral. Esta zona se establece siguiendo las recomendaciones del estudio científico que la define como un “punto caliente” de biodiversidad favorable a la concentración de especies depredadoras, como el dentón, la serviola o las diferentes especies de mero, entre otros. Estas poblaciones experimentarán un gran desarrollo en ausencia de pesca, dado que se favorecerá la preservación y regeneración de los recursos marinos de la zona.

Con esta incorporación de la nueva reserva habrá en las Islas Baleares unas 63.500 hectáreas protegidas por reservas marinas. En esta legislatura se ha constituido la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera, con 708 hectáreas, y la Reserva de la Punta de Sa Creu, a Formentera, con 1.059 hectáreas. Asimismo, se han modificado las normativas de las reservas marinas del Levante de Mallorca y de los Freus de Ibiza y Formentera, y se ha devuelto la protección máxima a S’Espardell. Actualmente se tramita la nueva Reserva Marina de l’Illa de l’Aire, en Menorca.

## **5. OTRAS POLÍTICAS AMBIENTALES**

### **5.1. Impulso a las propuestas de la Iniciativa de Custodia del Territorio de las Islas Baleares**

La organización Iniciativa de Custodia del Territorio de las Islas Baleares (ICTIB), colabora con el Gobierno de las Illes Balears para elaborar el inventario de iniciativas de custodia del año 2018, según el cual se ha llegado a 108 acuerdos con 19 entidades, lo que supone una superficie total en custodia privada de 9.919,59 hectáreas de todas las islas. De los acuerdos, 44 se han desarrollado en espacios protegidos total o parcialmente y el 95% de las acciones se desarrollan dentro de propiedades privadas en ENP.

Por porcentajes, los valores principales de los acuerdos van desde un 27% relacionados con los hábitats de interés comunitario a un 23% con respecto al valor paisajístico, serie de un 17% sobre los hábitats prioritarios, un 13% en anexos en la directiva de aves, un 8% para flora y un 6%, respectivamente, en elementos culturales y/o etnológicos o variedades locales o para prácticas tradicionales agrarias.

La Iniciativa de Custodia del Territorio de las Islas Baleares (ICTIB) es una organización sin afán de lucro constituida en el 2007 que promueve la custodia del territorio como estrategia para conservar los valores naturales, culturales y paisajísticos de las Islas Baleares. La ICTIB es una red formada por entidades, asociaciones, fundaciones, entes locales, empresas y personas físicas que hacen trabajo para la custodia del territorio en las Islas Baleares.

Los objetivos de la organización, entre otros, son los de promover la custodia del territorio entre los agentes implicados y la sociedad en general, incidiendo especialmente en los objetivos de conservación de la gestión tradicional del territorio, de especies de la fauna, de hábitats, de mejora del paisaje, de restauración de elementos singulares y de aprovechamiento sostenible de los recursos.

### **5.2. Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio firman un protocolo de colaboración sobre la inspección y vigilancia de los espacios naturales protegidos.**

La Agencia de Defensa del Territorio y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares han formalizado un protocolo de colaboración sobre inspección y vigilancia de los espacios naturales protegidos y de los lugares de la Red Naturaleza 2000. Hasta este momento, las pautas de actuación y de colaboración entre las dos instituciones tenían un carácter informal. El documento tiene una vigencia de cuatro años y se renovará anualmente de manera automática.

El objetivo del protocolo es establecer un régimen común y general de actuación que permita llevar a cabo las acciones de inspección y de vigilancia, intercambiar información entre las instituciones, organizar grupos de trabajo conjuntos y respetar las competencias propias de cada institución. Para conseguir este marco de coordinación, se creará una comisión de trabajo mixta que se encargará de promover los diferentes procedimientos operativos de actuación conjunta.

### **5.3. Menorca recibe más 400.000 euros para proyectos de conservación del patrimonio natural y cultural con fondo de ITS**

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha concedido 67 expedientes para proyectos de recuperación de patrimonio con fondo del Impuesto de Turismo Sostenible por un importe total de 408.000€. Aproximadamente el 65% de los proyectos subvencionados se encuentran en la isla de Menorca, ya que el importe total de la ayuda para todas las islas es de 500.000€.

Los proyectos se conceden para la rehabilitación o conservación del patrimonio natural y cultural en zonas protegidas y consiste en una ayuda de hasta 10.000€ por beneficiario para rehabilitar elementos patrimoniales, recuperar cultivos, acequias, aljibes, actuaciones para favorecer la avifauna, etc.

Las ayudas para conservación del patrimonio natural y cultural sólo se conceden a beneficiarios situados en espacios protegidos con reconocimiento de las administraciones, como son los de Red Natura 2000 y los espacios así considerados por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental. Igualmente se destinan fondos a iniciativas en espacios incluidos en ámbitos declarados como Patrimonio de la UNESCO o Reserva de la Biosfera.

**SUMARI:** 1. Introducció. 2. Activitat legislativa i normativa. 2.1. Aprovada la Llei de canvi climàtic i transició energètica. 2.2. Aprovada la Llei de residus de les illes Balears. 2.3. Aprovada la Llei de camins públics. 2.4. Aprovada la nova Llei agrària. 3. Política de paisatge. 3.1. Aprovació de l'Estratègia del paisatge de Mallorca. 3.2. El nou Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials aprovat a Mallorca integra les polítiques de paisatge. 4. Espais naturals 4.1. Informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca. 4.2. Cartografia de *Posidonia oceanica* a les illes Balears. 4.3. L'ampliació de Cabrera, una fita històrica que culmina una legislatura centrada en la protecció del mar. 4.4. Exposició pública del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 a Formentera. 4.5. El Govern estableix la nova reserva marina de Tagomago amb una superfície de 3.756 hectàrees i una zona de reserva integral de pesca. 5. Altres polítiques ambientals. 5.1. Impuls a les propostes de la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears. 5.2. Medi Ambient i l'Agència de Defensa del Territori signen un protocol de col·laboració sobre la inspecció i vigilància dels espais naturals protegits. 5.3. Menorca rep més de 400.000 euros per a projectes de conservació del patrimoni natural i cultural amb fons d'ITS.

## 1. INTRODUCCIÓ

Aquest primer semestre de 2019 s'han completat les últimes lleis de caràcter progressista de la legislatura, que inclouen fites mediambientals importants com el canvi climàtic, els residus o l'ús dels espais naturals i agraris. Això ens portarà a recórrer les iniciatives relatives a la Llei de canvi climàtic i transició energètica, la de la Llei de residus de les illes Balears, la de la Llei de camins públics i la nova Llei agrària.

D'altra banda, el paisatge ha entrat de nou a l'agenda política, almenys en una part de l'arxipèlag, on millora la integració d'aquesta variable en documents programàtics i plans de caràcter estratègic que obren el futur a noves iniciatives que haurien d'incorporar la redacció d'una llei específica sobre la protecció, ordenació i conservació del paisatge.

També s'han culminat iniciatives d'ampliació i millora d'espais naturals protegits i de diversos instruments d'ordenació. Aquestes iniciatives afecten espais tan emblemàtics com l'arxipèlag de Cabrera o s'Albufera de Mallorca. També s'han assolit avenços significatius pel que fa a la protecció d'àrees marines.

Finalment, l'impuls a la Custòdia del Territori com a mecanisme d'implicació del sector privat i els particulars en iniciatives de conservació s'està refermant a les nostres illes, amb l'assentament de la col·laboració de les administracions públiques en l'impuls d'aquestes iniciatives.

En el número de la revista d'aquest semestre tractarem tot això.

## 2. ACTIVITAT LEGISLATIVA I NORMATIVA

## 2.1. Aprovada la Llei de canvi climàtic i transició energètica

Finalment el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 27 de 2019), que té una *vacatio legis* fins al 2 de maig de 2019. Aquesta llei sorgeix de l'extrema necessitat de plantejar polítiques enèrgiques per fer front a un problema real que ha estat minimitzat durant dècades, amb ajornaments i incompliments dels compromisos internacionals assumits. No podem oblidar que els estudis que indicaven la tendència a un escalfament global que repercutia en modificacions sobre el clima del planeta, provenien de la dècada de 1980, la qual cosa va implicar que s'incorporessin a l'agenda política l'anàlisi i el tractament d'aquest escalfament global. Per això, els resultats de les investigacions amb relació a les repercussions del canvi climàtic van portar a incloure al programa de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro (1992) l'adopció de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC). La ratificació posterior del Tractat i les conferències de les parts per impulsar acords internacionals per fer front a aquest desafiament, han progressat molt lentament, amb incompliments sistemàtics dels estats participants en la convenció. Amb tot, una de les decisions més importants va ser l'adopció del Protocol de Kyoto, signat el 1997, que, per primera vegada, va marcar objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per als països industrialitzats. La falta de consens global i l'absència dels principals països emissors de gasos van posar de manifest la insuficiència d'aquest acord que ha evolucionat posteriorment amb noves conferències que van tancant propostes més pròximes a la capacitat real de compromís de les parts. Així, en la 21a Conferència de les Parts (COP21) de l'UNFCCC finalment es va adoptar l'Acord de París de 2015, que incorpora el compromís de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle com més aviat millor amb l'objectiu de mantenir l'increment de temperatura global per sota de 2°C respecte dels nivells preindustrials. Les parts també es van comprometre a fer un esforç addicional per limitar l'escalfament de manera que no superi els 1,5°C.

L'adopció de la Llei balear s'inscriu en els compromisos adoptats i s'avança en alguns aspectes a la Unió Europea i a l'Estat espanyol, amb una iniciativa pionera que, molt probablement, serà imitada per altres comunitats autònomes i pel



mateix Estat. La Llei s'inspira en el principi d'equitat amb la finalitat de fer realitat l'assumpció de les responsabilitats comunes però diferenciades en funció de les capacitats respectives. Les illes Balears, que han gaudit d'un desenvolupament econòmic sobre la base d'un gran ús dels combustibles fòssils, han de fer un gir cap a la implantació de la descarbonització i l'extensió de les energies renovables. Per fer possible aquest objectiu, les Balears es proposen arribar a l'emissió zero molt abans de l'any 2050.

Com molt bé s'afirma a l'exposició de motius de la Llei, la lluita contra el canvi climàtic i la transició cap a un nou model energètic també suposen una oportunitat econòmica i social important. Com s'ha vist, diversos estudis demostren l'enorme potencial de creació de llocs de treball associats a aquesta transformació, així com una competitivitat més gran vinculada als menors costos energètics i ambientals del nou model.

Les *Directrius de política per a una transició justa cap a economies i societats ambientalment sostenibles per a tot el món*, publicades el 2015 per l'Organització Internacional del Treball, afirmen que l'ecologització de l'economia pot actuar com un nou motor de creixement i com un generador net de llocs de treball dignes i verds que poden contribuir en gran manera a l'erradicació de la pobresa i a la inclusió social, així com a una economia competitiva. La Llei, per tant, també intenta establir una sèrie de principis rectors per garantir que la transició és justa i contribueix a complir els objectius d'inclusió social.

Es tracta d'una llei ambiciosa i extensa, carregada de mesures concretes i d'aplicació directa. Els 7 títols i 99 articles (amb la resta de disposicions addicionals i transitòries) comprenen continguts que van des del marc general del canvi climàtic i la transició energètica passant per l'organització administrativa de la gestió de la problemàtica, fins al règim disciplinari regulador dels incompliments de les previsions concretes de les seves normes. La llei també preveu un paquet de planificació amb el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic com a eix principal, a més d'una sèrie de línies estratègiques, la integració de la perspectiva climàtica en el conjunt d'instruments de planificació territorial i urbanística (en especial en el Pla Director Sectorial Energètic i els plans territorials insulars), i l'especial control ambiental dels plans i programes amb relació als objectius de la llei.

El títol IV desplega les polítiques energètiques amb relació a l'objectiu de reducció d'emissions, d'eficiència energètica, d'energies renovables, la gestió de la demanda i la reducció progressiva dels combustibles fòssils. La Llei tampoc no oblidava les polítiques de mobilitat i transport, amb la tendència a les zero emissions, ni les de sensibilització o exemplificació, que impliquen les administracions públiques com a motor del canvi.

Les mesures i els objectius que determina la Llei s'han previst per a un horitzó a mitjà i llarg termini. És evident que per assolir-los es requereixen els esforços coordinats dels poders públics i els agents privats, i la implicació de tota la societat. El canvi de model que suposa l'aplicació d'aquesta llei comporta que les mesures que conté s'hagin d'assumir tant des de l'àmbit públic com empresarial, social o particular perquè efectivament sigui possible la seva eficàcia.

Igualment, segons podem llegir en l'exposició de motius, aquesta llei és la culminació d'un procés de participació ampli, amb més de 2.000 persones implicades entre empreses, entitats socials, associacions i particulars. També la tramitació parlamentària ha comptat amb nombroses aportacions, dels diversos grups parlamentaris.

L'horitzó que fixa la Llei és tenir unes illes lliures de combustibles fòssils i el 100% d'energies renovables el 2050. Per al 2030 les previsions són disposar d'un 35% de renovables, d'un 23% de reducció del consum energètic i d'una disminució del 40% de les emissions contaminants.

S'ha de destacar que, paral·lelament a l'aprovació de la Llei, el Govern de les Illes Balears ha anat adoptant mesures que preparen les nostres illes per dur a terme aquesta transició energètica en condicions.

## **2.2. Aprovada la Llei de residus de les illes Balears**

El *Butlletí Oficial de les Illes Balears* número 23 de 21 de febrer de 2019 va publicar l'esperada Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminants de les illes Balears, que dota la comunitat autònoma d'un instrument legislatiu pioner i sense exemples comparats en altres autonomies. Es tracta d'una norma que va en la línia acordada, el passat 18 de gener, pels 28 estats membres sobre gestió

de residus i que instaura una política comuna per avançar decididament en la resolució d'una problemàtica creixent.

Aquesta nova norma regula tota la problemàtica de la gestió de residus i assenyala des del principi que el millor residu és el que no es produeix. En aquest sentit, la reducció dels plàstics és un dels objectius principals. Així, a partir de 2021 no es podran comercialitzar bosses de plàstic d'un sol ús i només es permetran compostables en establiments de venda a granel; les anelles plàstiques dels paquets de llaunes i d'ampolles de begudes només podran ser biodegradables; les safates per a aliments, els vasos, els coberts, les palletes per a begudes, els bastonets de les orelles, els bastonets per a caramels i els plats de plàstic d'un sol ús només es podran comercialitzar si són compostables. El projecte de llei va ser aprovat pel Consell de Govern de dia 22 de juny de 2018 i va entrar al registre del Parlament dia 2 de juliol de 2018 (RGE 7154/2018). La tramitació va continuar en reprendre's el període de sessions de la tardor, i el 21 de novembre de 2018 es va constituir la ponència a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. La ponència va redactar el corresponent informe el dia 18 de gener de 2019 i finalment la Comissió va votar i va aprovar el dictamen el dia 23 de gener de 2019.

La Llei de residus ha estat aprovada amb un gran consens i després d'un ampli procés de participació, durant el qual s'han rebut més de 800 aportacions. Cal destacar que, abans que hagi estat aprovada, altres comunitats autònomes ja han mostrat interès a conèixer-ne l'articulat.

Respecte al contingut, aquesta llei de residus i terres contaminats s'estructura en nou títols, sis disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Aquesta llei conté un total de vuitanta articles i set annexos.

D'acord amb el que podem llegir en l'exposició de motius, el títol I conté les disposicions i els principis generals, l'objecte i la finalitat de la llei, i els principis que han de regir la planificació i la gestió dels residus, com els d'autosuficiència i proximitat, la jerarquia, les accions de sensibilització, l'educació i conscienciació, i la necessitat de la implementació progressiva del pagament per generació, real i efectiu, a través dels preus públics, tarifes i taxes.

En segon lloc, el títol II estructura el règim competencial en matèria de residus partint de la situació actual i aporta claredat i seguretat jurídica. S'ha de destacar l'organització administrativa de la gestió que s'adopta, de tal manera que el Govern de les Illes Balears manté la competència en planificació de residus perillosos, la d'autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió de residus, la de trasllat de residus i la potestat reglamentària i de desplegament normatiu en l'àmbit regulat per aquesta llei.

D'altra banda, els consells insulars mantenen la competència en planificació de residus no perillosos que ja estan exercint, el tractament insularitzat i obligatori dels residus domèstics barrejats. Igualment, els ajuntaments s'han de responsabilitzar de la recollida i la vigilància, la inspecció i la sanció en l'àmbit dels residus domèstics. També la programació de la gestió es trasllada als consells insulars.

Una de les fites de la Llei és que prohibeix la importació de residus per tractar-los en instal·lacions públiques de les illes Balears, d'aquesta manera es tanca la polèmica d'anteriors legislatures respecte a la incineració de residus importats d'altres estats de la Unió Europea, que limitaven la capacitat de resposta davant d'altres polítiques actives a les Illes.

Amb l'aprovació d'aquesta llei, les illes Balears inicien un canvi de model basat de consum en la prevenció i el foment de l'economia circular que requerirà la col·laboració de les administracions, les empreses i els ciutadans. Tot, amb l'objectiu d'assegurar el manteniment del medi ambient i la sostenibilitat en un territori tan fràgil com són les illes Balears.

El títol III persegueix garantir els objectius de la Llei de residus i terres contaminats de les illes Balears i establir mesures adequades per arribar a assolir-los. Conté mesures per a la prevenció, la reutilització i la disminució de la condició de perillositat dels residus, reducció qualitativa i quantitativa, i per evitar el malbaratament alimentari, reduir la generació de residus d'envasos o garantir-ne la gestió efectiva.

Igualment, el títol IV es dedica a la futura creació de l'Ens de Residus de les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en medi ambient, amb personalitat

jurídica pròpia i responsable de l'execució del Fons de Prevenció i Gestió de Residus, d'acord amb les directrius establertes pel Govern de les Illes Balears.

Els títols V i VI, dedicats a la regulació del règim administratiu de la producció, la possessió i la gestió de residus a les illes Balears, i quant al règim aplicable per a determinats residus, com els de construcció i demolició, els llots de les aigües residuals urbanes o els vehicles fora d'ús, pretenen complementar i adequar a la realitat i als problemes de la comunitat autònoma les previsions, més generals, de la normativa estatal.

D'altra banda, el títol VII es dedica als aspectes relatius al control de sòls afectats per contaminació antròpica, a la declaració de sòls degradats i contaminats, al registre i als procediments per recuperar-los.

Al títol VIII es vol donar la importància que ha de tenir la informació en matèria de residus, ja que considera primordial disposar de dades suficients, contrastables i estandarditzades, a les quals la població ha de tenir accés, per permetre un seguiment real i efectiu dels plans de residus i el compliment dels objectius propis o demanats per l'Estat espanyol o la Unió Europea.

Finalment, el títol IX, dividit en dos capítols, es deixa per regular els aspectes relatius al règim de vigilància, control i inspecció d'infraccions en matèria de residus i sancionador de la Llei.

Les disposicions addicionals fan referència als mitjans necessaris per assegurar el compliment de la Llei, la tramitació electrònica i els registres informàtics, la declaració de subproductes i el final de la condició de residu, les entitats col·laboradores, les llicències d'activitats i el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus, que només s'aplicaria, en cas de no complir els objectius, marcats per la Llei.

Les disposicions transitòries es dirigeixen fonamentalment a establir terminis en l'àmbit de la planificació, la tramitació electrònica, la recollida de noves fraccions de residus, l'adaptació de tributs, la regulació de centres de reciclatge i la planificació dels consells insulars.

La disposició derogatòria única es refereix a un aspecte concret de derogació normativa, i les dues disposicions finals, a l'habilitació per al desplegament reglamentari de la norma i a l'entrada en vigor.

Els annexos estableixen el contingut del Registre de producció i gestió de residus de les illes Balears (annex 1), el model de declaració responsable per al trasllat de residus (annex 2), la documentació per adjuntar a la sol·licitud d'autorització per a instal·lacions de gestió de residus (annex 3), la comunicació de transportista amb caràcter professional (annex 4), el contingut del Registre de sòls contaminats, de sòls degradats, de processos de recuperació voluntària i de declaració de terra contaminat (annex 5), els nivells genèrics de referència per a metalls pesants a les illes Balears (annex 6) i el model per a la declaració de dades relatives als residus municipals (annex 7).

La Llei de residus ofereix a tots els actors implicats dos anys per adaptar-s'hi. Amb tot, cal subratllar que molts d'aquests actors, com ara les grans cadenes de distribució d'aliments o administracions municipals, ja prenen mesures en la línia que marca l'articulat.

Entrant en detalls que poden destacar-se, veiem que la llei conté previsions del tipus que els cosmètics i dentífrics no podran contenir microplàstics o nanoplàstics; s'hauran de comercialitzar les versions reutilitzables d'encenedors, cartutxos i tòners d'impresora i fotocopiadora; les càpsules d'un sol ús de cafè, infusions, brous i d'altres utilitzades en cafeteres s'hauran de fabricar amb materials compostables o bé hauran de ser fàcilment reciclables. En tot cas, estaran sotmeses a responsabilitat ampliada del productor.

També en la línia de prevenir l'excessiva generació de residus d'envasos, es promourà la instal·lació de fonts d'aigua potable o el subministrament en envasos reutilitzables i no es podran distribuir begudes en envasos d'un sol ús a les institucions públiques. A més, la Llei també estableix que els establiments d'hostaleria i restauració sempre han d'oferir als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada apta per al consum humà, de manera gratuïta i complementària.

En els esdeveniments públics que comptin amb el suport de les administracions públiques, s'hauran d'implantar alternatives en venda i la distribució de begudes

envasades i de vasos d'un sol ús. Encara que la reducció dels plàstics és un dels principals objectius, la Llei també regula altres tipus de residus. Així, per exemple, les tovallolletes humides hauran d'incorporar informació sobre els efectes al medi ambient; les ordenances municipals hauran d'incorporar mesures de prevenció i minimització de l'abandonament de residus a les platges, com les burilles de tabac.

Pel que fa a reciclatge, es marquen objectius clars. El 2021 els municipis hauran d'assolir el 50% de reciclatge en materials com a paper, metalls, vidre plàstic i bioresidus dels residus domèstics. L'any 2030 aquesta xifra haurà d'arribar al 65%. Respecte als envasos, se n'haurà de reciclar el 75% abans del 2030.

Cal subratllar que, en tot cas, s'aplicaran mètodes que assegurin que es compleix un dels principis fonamentals de la Llei: "qui més contamina, més paga". Amb tot, no només cal fomentar el reciclatge per reduir la quantitat de residus i, per tant, la Llei també preveu objectius sobre reutilització. Per exemple, el 2025 un 3% dels residus domèstics gestionats s'han de preparar per reutilitzar. En aquest sentit, cal destacar que en la tramitació parlamentària s'ha incorporat un objectiu de reutilització dels envasos de begudes per al 2030.

Finalment s'adopten mesures per reduir el malbaratament alimentari amb l'objectiu que el 2030 es redueixi a la meitat amb relació al 2020.

Com ja s'ha dit, una vegada entri en vigor la normativa, quedarà prohibida la importació de residus a plantes públiques de les illes Balears. A més, no es podrà incinerar ni abocar cap mena de residus sense que abans s'hagin pretractat.

### **2.3. Aprovada la Llei de camins públics**

El Parlament de les Illes Balears va aprovar a finals de desembre la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, una llei que preveu la creació d'una xarxa de camins —preferiblement sense asfaltar— que connecti tots els pobles de Mallorca i també els de Menorca i recuperi vies que, malgrat ser públiques, es van tancar fa dècades i s'han deixat d'utilitzar; tot això motivat pel fet que els camins han de ser considerats un patrimoni de tothom i dels quals tothom ha de poder gaudir. Segons es resumeix a l'exposició de motius, aquesta llei dona resposta a la necessitat d'establir un

règim jurídic per als camins públics a fi de poder recuperar-los i promoure'n l'ús i la defensa. Així mateix, proporciona un marc legal per a rutes d'interès senderista existents i obre la possibilitat de poder crear-ne de noves.

L'objecte d'aquesta iniciativa legislativa és establir el règim jurídic dels camins públics de Mallorca i Menorca. Aquest règim s'estén a totes les qüestions relacionades amb la planificació, projecció, finançament, construcció, modificació, conservació, explotació, ús i defensa dels camins públics. Igualment, es vol garantir la integració correcta dels camins en l'entorn.

També són objecte d'aquesta iniciativa els aspectes relatius a les rutes d'interès excursionista i la seva selecció, ordenació, protecció, senyalització i homologació com a rutes senderistes, a més de la integració en el Registre de rutes senderistes.

Respecte al contingut, s'estructura en quatre títols articulats al voltant del règim dels camins públics i els mecanismes de garantia del manteniment de la xarxa.

Així, el títol I recull l'objecte de la llei, és a dir, el règim jurídic dels camins públics i les rutes d'interès excursionista, i incorpora els principis generals, que es poden resumir en la defensa i conservació del patrimoni viari de Mallorca, potenciant l'ús responsable per part de la ciutadania com a mitjà més pròxim per accedir a l'entorn rural.

El títol II estableix el règim jurídic dels camins públics. En aquest sentit s'esmenta que, pel que fa a la noció de camí públic, es parteix d'un concepte que, atenent a la realitat, incorpora qualsevol tipus de camí que no només inclou la via de comunicació en si mateixa, sinó també els elements que —essent igualment de domini públic— hi són inherents per a la seva finalitat, com els pous, els abeuradors, els marges, etcètera. També s'estableix una zona de protecció, com ja fixa la legislació de carreteres, de 3 metres a cada costat del camí.

Amb relació al contingut del títol III, regula el senderisme com a manera d'accedir al medi ambient i a la naturalesa, i estableix la prohibició de crear noves rutes senderistes al marge de les establertes d'acord amb la Proposició de llei. Finalment, el títol es completa amb les condicions que poden permetre cancel·lar



les homologacions obtingudes així com les normes relatives a la conservació i la senyalització de les rutes senderistes.

El títol IV, d'altra banda, implanta el règim de les infraccions i sancions, amb la graduació de lleu, greu i molt greu, i amb multes que poden anar des d'un mínim de 60 euros fins als 20.000 euros per a les infraccions més greus. També s'estableix un règim adequat de prescripcions de la infracció, que va des de l'any per a les lleus, els dos anys per a les greus i els tres anys per a les més greus.

La llei acaba amb un conjunt de disposicions addicionals, transitòries i finals. En les disposicions addicionals es destaca la regulació dels plans especials d'ordenació territorial mitjançant la modificació de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial. Aquests plans es configuren com a instruments d'ordenació territorial en desplegament de les determinacions del Pla Territorial Insular i dels plans directors sectorials o també com a instruments de planejament autònom, quan així ho prevegi expressament una normativa sectorial. També són objecte de regulació els antics traçats de línies ferroviàries desafectades, així com la creació dels plans de vies ciclistes.

D'altra banda, preveu l'elaboració de diversos catàlegs de camins que donaran informació i oferiran control dels camins públics. Tant els municipals com els insulars tenen un termini màxim d'aprovació de quatre anys des de l'entrada en vigor de la llei.

També es posarà en marxa un registre insular de camins públics que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament a través d'un visor que serà actualitzat de manera contínua.

Cal destacar la creació d'un instrument nou d'ordenació: el Pla Director Sectorial de Camins. Aquesta és una de les figures clau de la llei que defineix una xarxa supramunicipal, un sistema complementari a la xarxa de carreteres però per a mitjans no motoritzats. Concretament, el Pla ha de preveure la normativa d'aplicació i ordenances d'ús, plànols informatius, d'ordenació i d'actuació.

Respecte als principals efectes previstos per la llei, amb relació a l'ordenació dels camins, tenim la declaració d'utilitat pública dels terrenys necessaris per a la seva execució, així com el deure del Consell de Mallorca i de Menorca de garantir

l'execució del Pla Director Sectorial i dels plans especials de camins mitjançant els corresponents estudis econòmics i financers.

Quant als usos, la llei determina que els camins han de ser d'accés lliure i gratuït i que estan destinats al trànsit no motoritzat. A més, els usos i aprofitaments diversos del dret de circulació o trànsit necessitaran autorització prèvia de l'administració titular del camí.

Un altre capítol de la normativa també es dedica a la pavimentació dels camins, i determina que en caràcter general els camins d'accés en medi natural i paisatgístic no es poden pavimentar, i si s'han de pavimentar per raons imperioses, caldrà tramitar la corresponent declaració d'interès general.

Així mateix, i amb l'objectiu de crear més homogeneïtat, es preveu l'elaboració d'un manual de senyals amb la finalitat que tots segueixin la mateixa pauta per tota l'illa.

Però a part dels camins públics, aquesta llei també fa referència a les rutes senderistes amb l'objectiu de recuperar, conservar i fomentar el patrimoni viari tradicional i el seu entorn, així com facilitar la pràctica d'aquest esport. És la primera vegada, en el cas de la comunitat autònoma, que es presenta una llei per regular tals rutes i protegir-les.

Així, s'ha de destacar aquesta atribució competencial per crear i gestionar una xarxa de rutes senderistes i vigilar, conservar, senyalitzar i mantenir rutes d'àmbit supramunicipal. Pel que fa a Menorca, la llei preserva les especificitats de la normativa vigent del camí de Cavalls.

Finalment, la llei també inclou una sèrie d'infraccions que es qualifiquen de molt greus, greus i lleus, que poden suposar sancions d'entre 60 euros fins als 20.000 euros. A més, la norma també inclou l'obligació de restituir les coses segons el seu estat anterior amb càrrec a l'infractor i de rescabament de danys i perjudicis que l'actuació hagi pogut ocasionar.

#### **2.4. Aprovada la nova Llei agrària**

Al *Butlletí Oficial de les Illes Balears* número 18 de dia 9 de febrer de 2019 s'ha publicat la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les illes Balears, una normativa

que es presenta com un text més agrícola i menys urbanístic que l'anterior, de tal manera que prioritza la producció d'aliments per garantir la sobirania alimentària de les illes Balears al segle XXI. Aquesta reforma recupera així, respecte de la norma anterior, l'agricultura en detriment de l'urbanisme. En aquest sentit, l'esperit de la Llei pretén garantir la continuïtat de l'activitat agrària i la producció d'aliments a les illes Balears millorant les rendes dels pagesos i protegint els recursos que necessiten per dur a terme la seva tasca.

Una de les principals novetats d'aquesta llei és la redefinició de la figura del pagès: dona especial importància a la seva activitat, no només com a generador d'aliments, sinó també com a protagonista d'una activitat que configura i preserva el paisatge. Aquest últim aspecte es reconeix amb dues noves figures: el contracte territorial i el parc agrari. La primera va dirigida a l'objectiu de conservació, i consisteix a cobrir els costos que representa per als agricultors la generació de tota una sèrie d'externalitats socials i ambientals positives per al paisatge (manteniment de les parets de pedra en sec i dels bancals i marges, dinamització d'altres sectors econòmics, etc.). Respecte al parc agrari, es tracta d'una figura que ordena i potencia els espais d'interès agrari de les zones periurbanes, per exemple el pla de Sant Jordi, a Palma. A més, per primera vegada, s'obre la possibilitat que es pugui exigir a qui generi pressió sobre terra rústic, fent un ús atípic d'aquest que compensi el sector agrari amb aquests dos instruments.

Partint d'aquesta idea, la Llei agrària estableix una nova figura de protecció per al sòl rústic: les zones d'alt valor agrari (ZAVA), terres especialment riques per a l'agricultura que s'instauren com a espai d'ús exclusiu per al sector agrari, que tindran prioritat a l'hora de rebre ajuts.

Finalment, el text estableix que els consells insulars, amb la participació de representants agraris, són els encarregats de delimitar-les en un termini màxim de dos anys després de l'entrada en vigor de la Llei. Passat aquest termini, i només en cas que no s'hagi completat la delimitació, la podrà fer la conselleria competent en matèria d'agricultura. Fins que els consells delimitin les ZAVA, caldrà un informe de la Direcció General d'Agricultura per dur a terme usos i/o edificacions no agràries en les àrees d'especial interès agrari (AIA). Aquestes són algunes de les novetats que han introduït els grups parlamentaris durant el

tràmit de ponència, amb relació al Projecte de Llei aprovat pel Consell de Govern al juny de 2018.

Igualment, s'ha modificat el règim de les denominades agroestades. En la ponència, s'ha suprimit el límit de sis mesos l'any per practicar aquesta activitat complementària i s'ha ampliat la possibilitat d'oferir allotjament en un habitatge de l'explotació diferent de la residència de l'agricultor. Es manté, tanmateix, que el pagès hagi de residir a la mateixa explotació. A més, els interessats ja no hauran de complir tots els requisits que marca la Llei turística, encara que hauran de comprar les places corresponents, a les quals s'assignarà una categoria específica i un preu més reduït a la resta de places turístiques previstes en la legislació corresponent.

Es tracta d'una activitat complementària que, a fi que no es converteixi en substitutòria de l'agrària (com a activitat principal i exclusiva), només la podran dur a terme les explotacions preferents, professionals i prioritàries. Precisament, la definició de preferents s'adapta a la realitat de cada illa i al tipus de cultiu respecte a l'extensió, fet que possibilita que més explotacions puguin assolir aquesta consideració que amb la redacció prevista en l'anterior Llei agrària.

En canvi, la venda directa, la degustació del producte propi i la primera transformació es poden dur a terme a qualsevol mena d'explotació. I és que una de les prioritats que es marca la Llei és garantir la sobirania alimentària.

Es fomenta també la venda de proximitat i s'estableix que en la compra pública es donarà prioritat als productes de qualitat diferenciada, de venda de proximitat, frescos i de temporada, la qual cosa suposa un avenç important respecte de la Llei de 2014, que només feia menció de la qüestió sense gaire desenvolupament.

Per primera vegada, a més, s'inclou en una llei d'aquestes característiques, una relació de drets i deures dels propietaris de terra rústic en sanitat vegetal. Es vol evitar que la manca d'atencions a les explotacions pugui representar un focus d'infecció per a les produccions agràries, com en el cas de la *Xylella fastidiosa*. Per això s'ofereixen eines per facilitar aquest manteniment, com els bancs de terres, de manera que l'amo de la terra i el pagès puguin posar-se en contacte entre ells a través de l'Administració, que ha de vetllar pels interessos d'ambdues parts.

D'altra banda, tota la ramaderia es considera una activitat agrària estratègica, independentment de l'espècie (per a la llei anterior només ho eren els èquids).

Respecte a la producció agrària, es reconeix la importància de les races autòctones i les varietats vegetals locals també com a patrimoni genètic de les illes Balears. Per aquesta raó, es crea el Catàleg de varietats locals i se'n fomenta la sembra. També es prohibeix sembrar organismes modificats genèticament (transgènics), atenent a la directiva europea.

Així mateix, aquesta nova Llei agrària dona més importància als aspectes socials del sector agrícola, mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal. En aquest sentit, cal destacar l'elaboració d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones al sector primari. A més, es reconeix el cooperativisme com a dinamitzador i estructurador del sector professional i de l'agricultura familiar, així com el paper que té en la garantia del relleu generacional.

En l'àmbit de la participació, s'apodera el Consell Agrari Interinsular perquè s'autoreguli, i en el del coneixement es crea l'Estratègia balear de millora de coneixement agrari, que ha de contenir les directrius i els plans d'actuació sobre aquesta matèria, que les administracions públiques han de seguir al llarg d'un període determinat.

### **3. POLÍTICA DE PAISATGE**

#### **3.1. Aprovació de l'Estratègia del paisatge de Mallorca**

El *Butlletí Oficial de les Illes Balears* número 35 del dia 16 de març de 2019 publica l'acord d'aprovació de l'Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca en execució del Conveni europeu del paisatge i del Pla Territorial Insular.

Hem de recordar que el Conveni europeu del paisatge (CEP/2000), adoptat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 19 de juliol de 2000, es va obrir a la signatura de les parts a Florència, el 20 d'octubre de 2000, en el marc de la campanya del Consell d'Europa encapçalada pel lema "Europa, un patrimoni comú", i va entrar en vigor el dia 1 de març de 2004, després que deu estats membres del Consell d'Europa expressessin el consentiment a vincular-se al

document. Espanya el va ratificar al mes de novembre de 2007, havent entrat en vigor al nostre país el primer de març de 2008.

El Conveni europeu del paisatge reconeix el principi de subsidiarietat i el d'autonomia local. Per això, el document insta els estats signataris a implicar les administracions locals i regionals en la concreció i implantació de polítiques de paisatge, la identificació i qualificació dels paisatges i també en la definició d'objectius de qualitat paisatgística. Amb tot això es pretén reforçar el compromís institucional pel que fa al paisatge i es fa una adaptació progressiva, però substancial, des d'un punt de vista tècnic, administratiu i normatiu.

En aquesta línia d'implantació de polítiques de paisatge, el Consell Insular de Mallorca, mitjançant l'Acord adoptat pel Ple de dia 4 de febrer de 2008, es va adherir als "principis, els objectius i les mesures contingudes al Conveni europeu del paisatge", i es va integrar, a més, a la Xarxa Europea de Poders Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC). Com a aportació al debat sobre la necessitat d'implantar polítiques de paisatge a Mallorca, el Consell Insular va publicar el document *Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca* en desplegament del Conveni europeu del paisatge. Aquest document contenia les bases per a una estratègia o pla de paisatge de l'illa de Mallorca, estratègia que es formulava des del Departament de Territori del Consell de Mallorca, en l'àmbit de les competències del Consell Insular.

Des d'aquell moment el Consell de Mallorca va impulsar diverses polítiques de paisatge, d'una part amb la tramitació i posterior reconeixement de la serra de Tramuntana a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO, a la categoria de paisatge cultural; d'altra banda, amb la incorporació de la variable paisatgística com a element integrador i transversal de la intervenció administrativa en el territori mitjançant la modificació número 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca.

L'Estratègia de paisatge preveu la incorporació i promoció del caràcter i els valors del paisatge en les indicacions geogràfiques protegides, les denominacions d'origen i, en general, en projectes i iniciatives de promoció i innovació econòmica relacionats amb els recursos locals, l'artesania i els sabers i les activitats productives tradicionals. De fet, el Departament d'Economia i Hisenda de la institució té un programa de promoció econòmica i artesanies. Altres

exemples, com el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, afavoreixen l'impuls en la conservació i gestió d'elements i components valuosos del paisatge rural a través de projectes subvencionables.

A més d'això, una altra directriu plantejada és la promoció de la figura del parc agrari, a més del foment de la funció productiva econòmicament viable, la gestió i activació del paisatge i la seva interpretació, associada a l'alimentació de qualitat i proximitat. Aquesta iniciativa segueix les previsions de la recent Llei agrària. D'altra banda, encara que concebuda amb una altra funció, la normativa del Pla Territorial Insular de Mallorca recull la figura de parc periurbà al voltant de la ciutat de Palma, que podria constituir la llavor d'iniciatives com les proposades al document.

En aquest context, el Consell Insular de Mallorca vol promoure i desplegar una estratègia específica i coordinada per a la salvaguarda dels valors paisatgístics, la gestió dels processos de canvi territorial respectuosa i integrada al caràcter dels paisatges.

Aquest projecte és molt singular a Espanya. És més, només les comunitats d'Andalusia i, amb un caràcter molt menys ambiciós, Múrcia i Galícia, tenen un model d'estratègia de paisatge.

### **3.2. El nou Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials aprovat a Mallorca integra les polítiques de paisatge**

El Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 1 d'abril de 2019 ha aprovat el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA). Aquest pla d'ordenació territorial de la implantació comercial ha integrat la variable del paisatge, tant urbà com rural, en les seves previsions, amb la finalitat d'harmonitzar millor la implantació dels nous equipaments comercials i millorar la integració paisatgística dels existents.

Així, d'una banda, s'estableixen els condicionants territorials de la implantació dels equipaments comercials segons les característiques del sòl, l'aptitud demogràfica i els condicionants territorials, inclosos els relatius a les infraestructures existents i el seu nivell de servei.

D'altra banda, es destina un capítol complet a les condicions d'implantació i d'integració dels equipaments, amb mecanismes d'identificació d'impactes i externalitats i la necessitat d'avaluar tals impactes. Igualment, la variable del paisatge s'incorpora com a element transversal en tota la regulació articulada, amb la finalitat d'acollir les previsions de l'Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca.

## **4. ESPAIS NATURALS**

### **4.1. Informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca**

S'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les illes Balears i el 1988 es va convertir en el primer parc natural de l'arxipèlag. Fins a l'any següent no es va aprovar la Llei 4/1989 que instaura els plans d'ordenació dels recursos naturals (PORN), fet que ha motivat que històricament s'Albufera mai no n'hagi tingut cap. No obstant això, i malgrat ser l'espai protegit amb més experiència de gestió de les illes Balears, el pas dels anys i la pressió externa fan cada vegada més necessària la redacció i aprovació d'aquest document d'ordenació.

El projecte de PORN de s'Albufera preveu l'ampliació, en un 20%, de la superfície del parc natural. Més concretament, preveu una ampliació del parc de 417 ha, que sumades a les actuals, comportaran un total de 2059 ha, i incorpora, per primera vegada a les illes Balears, una zona perifèrica de protecció (ZPP), així com corredors ecològics que regularà el PORN. Aquestes zones, tanmateix, no formaran part del parc natural.

El PORN intenta respondre als grans desafiaments que als quals ha d'enfrontar-se s'Albufera al segle XXI. El principal, segons coincideixen tots els estudis que s'han realitzat, és la salinització creixent. Per això, el PORN preveu l'ampliació del parc natural, incorporant àmplies superfícies contigües de zona humida, en gran part parcel·les abandonades. D'aquesta manera, els límits del parc natural coincidiran amb la zona humida real. També s'incorporen la zona de Son Bosc, un objectiu que s'ha perseguit des de gairebé la mateixa declaració del parc natural, i la platja del Comú, una mesura fonamental per restaurar el sistema



platja-duna, un ecosistema fràgil, degradat i excepcional. Fins ara, només havia protegit el sistema dunar.

Tota la zona ampliada quedarà sota la figura d'ús compatible. Així doncs, els objectius de conservació ambiental seran compatibles amb el manteniment dels usos agraris, forestals, ramaders i cinegètics, així com amb certes infraestructures i usos recreatius. La platja tindrà la catalogació d'ús limitat admetent l'ús públic, sempre que sigui compatible amb la conservació de l'espai natural.

D'altra banda, l'esborrany de PORN de s'Albufera considera ZEP les zones de veles a les marjals de Muro i de sa Pobla amb un cert ús agrari; les principals síquies a les marjals esmentades que alimenten la zona humida; una franja de sistema dunar que envolta les Casetes dels Capellans, i les basses de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Mur-Santa Margalida.

Totes aquestes zones ZPP tenen com a funció fonamental la constitució d'un espai de protecció de l'espai natural protegit, així com la conservació i control d'ambients rurals pròxims. Per això els principals usos que han de fomentar les ZPP són: protecció i manteniment de síquies i ullals que alimenten la zona humida; protecció de petites conques que arriben a la zona humida; usos agrícoles, ramaders i cinegètics compatibles amb la conservació o la seva recuperació; conservació i gestió de fauna, flora, hàbitats, ecosistemes i patrimoni; restauració d'ecosistemes i millora d'hàbitats.

Per la seva part, els corredors ecològics són els espais necessaris per aconseguir la connectivitat ecològica del territori, en particular entre els espais protegits per la Xarxa Natura 2000 i els que tenen una rellevància singular per a la biodiversitat. Tenen un caràcter prioritari els cursos fluvials. Així, l'esborrany del PORN considera corredors ecològics la sèrie d'estanys, zones humides i les connexions entre aquestes i també amb el mar, connectats amb s'Albufera, amb interès ecològic independentment del grau de degradació o artificialització que tenen. Així mateix, es consideren corredors ecològics el llit i els marges dels trams finals dels principals torrents que arriben a la zona humida.

Aquestes zones tenen com a funció fonamental la protecció d'una sèrie de zones humides pròximes amb un determinat grau de degradació però que formen part

dels desplaçaments habituals d'algunes espècies de fauna, especialment ocells i peixos. Els principals usos per fomentar els corredors ecològics són els següents: protecció de zones humides pròximes que, sense estar integrades a l'espai natural protegit, hi estan relacionades; protecció i manteniment de torrents, síquies i ullals que alimenten la zona humida; conservació i gestió de fauna, flora, hàbitats i ecosistemes, restauració d'ecosistemes i millora d'hàbitats; observació i gaudi de la naturalesa, interpretació i educació ambiental.

La redacció del PORN i l'ampliació que es preveu a l'esborrany és, per tant, una fita indispensable per aconseguir la pervivència futura d'aquesta zona humida i, alhora, assegurar-ne la preservació dels hàbitats i espècies. Finalment, la proposta de PORN intentarà garantir la pervivència de les activitats tradicionals relacionades amb agricultura, ramaderia i caça compatibles amb els objectius de conservació i que podran exercir-se a les zones ampliades i en les ZEP.

#### **4.2. Cartografia de *Posidònia oceanica* a les illes Balears**

El Govern de la CAIB ha iniciat els treballs de cartografia de detall de les prades de posidònia amb la finalitat de dotar d'una efectivitat pràctica més gran el decret que la protegeix. Es tracta d'una cartografia detallada de les prades que es troben a les zones LIC de les Balears. En una primera fase s'elabora la cartografia de diverses zones declarades LIC de Mallorca i part de Menorca; en una fase posterior es completa la cartografia de diverses zones declarades LIC a les àrees restants de Menorca així com la de les illes d'Eivissa i Formentera.

Les tècniques utilitzades permeten una gran precisió a la cartografia, mitjançant el Side Scan Sonar per a profunditats compreses entre 5 i 40 metres i interpretació d'ortofotos recents per a fons succints, entre 0 i 5 metres. S'hi afegeix un sistema de vídeo per a la captació simultània d'imatges del fons, amb la qual cosa es pretén analitzar la total cobertura del fons. Tant en l'ús d'ortofotos com en l'ús del Side Scan Sonar, les posteriors interpretacions es contrasten adequadament amb verificacions in situ. El posicionament en x-y es realitza mitjançant GPS diferencial, a més de l'ús d'una ecosonda.

En la fase de cartografia es distingeixen com a mínim les unitats següents, subunitats o fàcies: prades de *Posidonia oceanica*, entre les quals diverses tipologies (orientativament: prats amb cubetes, prats continus o molt densos,

prats continus i poc densos, prats discontinus, taques aïllades amb canals entre mates, etcètera); la mata morta de *Posidonia oceanica*; altres prats, en particular de *Cymodocea nodosa*; fons sedimentaris sense coberta biològica, amb distinció fins on és possible de les grans unitats sedimentàries; fons o afloraments rocosos, i fons de maèrl.

Finalment, aquestes feines de cartografia també permeten explotar altres interessants aplicacions, com la detecció d'esculls artificials, marques d'arrossegament, senyals d'extracció d'àrids, canals o conduccions, estructures per a l'ancoratge d'embarcacions, etcètera.

### **4.3. L'ampliació de Cabrera, una fita històrica que culmina una legislatura centrada en la protecció del mar**

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha aprovat l'acord pel qual s'amplien els límits del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, incorporant 80.779 noves hectàrees d'espais marins confrontants. D'aquesta manera, la superfície total del parc passa de les 10.021 hectàrees actuals a les 90.800, i es converteix en el parc nacional marí més important de la Mediterrània occidental.

Aquest parc nacional, declarat el 1991, està situat al sud de Mallorca i el componen una illa principal, Cabrera Gran, i 18 illes menors, de les quals l'illa dels Conills és la més important. Com a conseqüència de l'ampliació, la superfície marina de la Xarxa de Parcs Nacionals passa d'un 4% a un 23% i l'arxipèlag de Cabrera es converteix en el parc nacional més gran d'Espanya, incloent-hi els terrestres.

Després de la incorporació d'aquestes noves 80.779 hectàrees, el parc nacional inclou una molt bona representació de 12 dels 13 sistemes naturals marins que, d'acord amb la Llei de parcs nacionals, han de ser presents a la Xarxa. Únicament falten per representar els sistemes associats a emanacions gasoses submarines.

El nou parc ampliat incorpora per primera vegada aigües de mar oberta a la xarxa de parcs nacionals, encara que no aigües exteriors, que ja existien al parc nacional abans d'aquesta última ampliació. Amb això es passa a cobrir un rang

de profunditats de més de 2.000 metres, amb la qual cosa es protegeix una varietat d'hàbitats singulars i amenaçats de la Mediterrània considerats d'especial valor, així com els paisatges marins associats.

Així, la zona d'ampliació aporta una representació important de dos sistemes naturals encara no presents a la Xarxa de Parcs Nacionals (àrees pelàgiques de passada, reproducció o presència habitual de cetacis o grans peixos migradors i bancs de coralls profunds) i millora substancialment la representativitat d'altres dues (baixos i escarpes de pendent pronunciat i baixos rocosos). Amb aquests sistemes naturals i la seva biodiversitat associada, la Xarxa de Parcs Nacionals millorarà substancialment la riquesa i representativitat marina.

Així mateix, la zona ampliada aportarà importants àrees d'alimentació per a un dels elements de la fauna més representatius de l'actual parc nacional, com són els ocells marins, el grup més amenaçat de l'avifauna a escala global. Nonetes, corbs marins, gavines i virots petits (el virot petit balear és l'ocell més amenaçat d'Europa), espècies en alguns casos catalogades en perill d'extinció, es beneficiaran de la protecció dels recursos pesquers que aporta el parc, i s'evitaran, a més, captures accidentals en arts de pesca.

Quant als cetacis i les grans espècies de peixos, la zona es constitueix en un autèntic santuari, especialment important per a dofins, catxalots, rorquals, esquals, peix espasa i tonyina vermella. L'àrea objecte d'ampliació s'inclou a la zona de reproducció més important per a aquesta última espècie de tota la Mediterrània.

El fet que el nou parc ampliat incorpori per primera vegada el mar obert a la xarxa de parcs nacionals obligarà a adoptar mesures pioneres de gestió i conservació del medi marí com a parc nacional. I com a espai natural protegit, correspon aplicar-les íntegrament a la comunitat autònoma, segons la reiteradíssima doctrina del Tribunal Constitucional.

La proposta d'ampliació ha comptat amb un ampli consens social, ha rebut un suport unànime al si del Patronat del Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera. També ha tingut un nombrós suport segons consta en els estudis d'opinió realitzats l'any 2017, que van mostrar una acceptació social molt àmplia a les illes Balears. En l'àmbit nacional, el Congrés dels Diputats va aprovar per una

àmplia majoria una proposició no de llei amb data 20 de juny 2017 que recollia també aquesta ampliació. Així mateix, la proposta ha estat sotmesa al tràmit d'informació pública durant dos mesos i ha estat informada pel Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals en la reunió al mes de desembre passat de 2018.

#### **4.4. Exposició pública del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 a Formentera**

El Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Formentera s'ha sotmès a exposició pública en el procés que s'està duent a terme per dotar dels corresponents instruments de gestió tots els espais incorporats com a llocs d'importància comunitària (LIC) o zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) a la Xarxa.

Pel que fa a l'illa de Formentera, les zones protegides com LIC o ZEPA sumen un total de 8.518 hectàrees, repartides en cinc espais: tres d'àmbit marí i dos d'àmbits mixtos. Tres comprenen llocs d'importància comunitària (LIC) d'àmbit exclusivament marí: cala Saona, Tramuntana i Migjorn. Els altres dos —cap de Barbaria i la Mola— són d'àmbit terrestre i marí, i són considerats LIC i zones d'especial protecció per a les aus, ZEPA. Actualment, només els LIC i ZEPA de la Mola i de cap de Barbaria disposen d'un instrument de gestió parcial. Una vegada s'aprovi el Pla de Gestió, els cinc espais s'incorporaran a la Xarxa amb la categoria de zona d'especial conservació (ZEC).

El Pla recull els valors ecològics i ecosistèmics presents. D'una banda, descriu els hàbitats i les espècies que ho van fer mereixedor de formar part de la principal xarxa europea de protecció natural. De l'altra, en precisa l'estat de conservació i defineix les amenaces i pressions a què es veuen sotmesos. A l'espai Xarxa Natura 2000 a Formentera s'ha contrastat la presència de 12 tipus d'hàbitats d'interès comunitari. Dels quals, cinc són considerats d'interès prioritari, com les prades de posidònia, que ocupen el 30,14% de la superfície inclosa dins del Pla de Gestió. El pla inclou també les mesures de finançament corresponents.

#### **4.5. El Govern estableix la nova reserva marina de Tagomago amb una superfície de 3.756 hectàrees i una zona de reserva integral de pesca**

El Consell de Govern va aprovar el 14 de desembre el decret pel qual s'estableix la reserva marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago. La nova reserva

marina comprèn 3.756 hectàrees, entre la punta des Jonc, s'Argamasa i les aigües interiors que limiten amb l'illot de Tagomago. Aquesta àrea marina presenta un valor ecològic i pesquer considerable. La creació de la nova reserva produirà un increment substancial de les poblacions de peixos comercials dins dels límits i els voltants. Això afavorirà el sector pesquer artesanal d'Eivissa i les activitats econòmiques relacionades amb l'observació de peixos i la pesca recreativa de superfície.

En aquest sentit, cal recordar que la iniciativa de crear una reserva marina a la zona sorgeix a iniciativa de la Confraria de Pescadors d'Eivissa, que va comptar amb el suport del Consell Insular. La institució va encomanar un estudi científic que va confirmar que l'àrea que ara es protegeix té una importància capital per a la flota d'arts menors d'Eivissa i inclou una sèrie de "punts calents" de biodiversitat marina on coincideixen l'activitat pesquera professional, la recreativa i altres activitats econòmiques, en particular el busseig turístic.

L'estudi científic assenyala també que les captures de pesques experimentals són significativament més baixes que les de la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera, encara que les localitats mostrejades presenten característiques ambientals similars. A fi de recuperar poblacions de peixos pròximes a les potencials, resulta necessari regular les activitats que es practiquen per garantir-ne la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius.

D'altra banda, els estudis destaquen que l'àrea que cal protegir conté una gran diversitat de comunitats d'algues, així com importants prades de posidònia, que, lligat a l'estructura del fons marí, fan que aquesta tingui unes possibilitats de recuperació realment estimulants.

DA la reserva marina s'hi estableix una zona de reserva integral, sense cap tipus de pesca, en una àrea de 250 ha al voltant de la llosa del Figueral. Aquesta zona es determina seguint les recomanacions de l'estudi científic que la defineix com un "punt calent" de biodiversitat favorable a la concentració d'espècies depredadores, com el déntol, la cirviola o les diferents espècies de mar, entre altres. Aquestes poblacions experimentaran un gran desenvolupament en

absència de pesca, ja que s'afavorirà la preservació i regeneració dels recursos marins de la zona.

Amb aquesta incorporació de la nova reserva a les illes Balears hi haurà unes 63.500 hectàrees protegides per reserves marines. En aquesta legislatura s'ha constituït la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, amb 708 hectàrees, i la Reserva de la Punta de Sa Creu, a Formentera, amb 1.059 hectàrees. Així mateix, s'han modificat les normatives de les reserves marines del llevant de Mallorca i dels Freus d'Eivissa i Formentera, i s'ha tornat la protecció màxima a s'Espardell. Actualment es tramita la nova Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, a Menorca.

## **5. ALTRES POLÍTIQUES AMBIENTALS**

### **5.1. Impuls a les propostes de la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears**

L'organització Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB) col·labora amb el Govern de les Illes Balears per elaborar l'inventari d'iniciatives de custòdia de l'any 2018, segons el qual s'ha arribat a 108 acords amb 19 entitats, la qual cosa suposa una superfície total en custòdia privada de 9.919,59 hectàrees de totes les illes. Dels acords, 44 s'han dut a terme en espais protegits totalment o parcialment, i el 95% de les accions tenen lloc en propietats privades en ENP.

Per percentatges, els valors principals dels acords van des d'un 27% que estan relacionats amb els hàbitats d'interès comunitari a un 23% respecte al valor paisatgístic, sèrie d'un 17% sobre els hàbitats prioritaris, un 13% en annexos en la directiva d'aus, un 8% per a flora i un 6%, respectivament, en elements culturals o etnològics o varietats locals o per a pràctiques tradicionals agràries.

La Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB) és una organització sense afany de lucre constituïda el 2007 que promou la custòdia del territori com a estratègia per conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics de les illes Balears. La ICTIB és una xarxa formada per entitats, associacions, fundacions, ens locals, empreses i persones físiques que treballen per a la custòdia del territori a les illes Balears.

Els objectius de l'organització, entre altres, són promoure la custòdia del territori entre els agents implicats i la societat en general, incidint especialment en els objectius de conservació de la gestió tradicional del territori, d'espècies de la fauna, d'hàbitats, de millora del paisatge, de restauració d'elements singulars i d'aprofitament sostenible dels recursos.

### **5.2. Medi Ambient i l'Agència de Defensa del Territori signen un protocol de col·laboració sobre la inspecció i vigilància dels espais naturals protegits**

L'Agència de Defensa del Territori i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears han formalitzat un protocol de col·laboració sobre inspecció i vigilància dels espais naturals protegits i dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Fins a aquest moment, les pautes d'actuació i de col·laboració entre les dues institucions havien tingut un caràcter informal. El document té una vigència de quatre anys i es renovarà anualment de manera automàtica.

L'objectiu del protocol és establir un règim comú i general d'actuació que permeti dur a terme les accions d'inspecció i de vigilància, intercanviar informació entre les institucions, organitzar grups de treball conjunts i respectar les competències pròpies de cada institució. Per aconseguir aquest marc de coordinació, cal crear una comissió de feina mixta que s'encarregarà de promoure els diversos procediments operatius d'actuació conjunta.

### **5.3. Menorca rep més 400.000 euros per a projectes de conservació del patrimoni natural i cultural amb fons d'ITS**

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha concedit 67 expedients per a projectes de recuperació de patrimoni amb fons de l'impost de turisme sostenible per un import total de 408.000 €. Aproximadament el 65% dels projectes subvencionats es troben a l'illa de Menorca, ja que l'import total de l'ajuda per a totes les illes és de 500.000 €.

Els projectes es concedeixen per a la rehabilitació o conservació del patrimoni natural i cultural en zones protegides i consisteix en una ajuda de fins a 10.000



€ per beneficiari per rehabilitar elements patrimonials, recuperar cultius, síquies, aljubs, actuacions per afavorir l'avifauna, etcètera.

Els ajuts per conservar el patrimoni natural i cultural només es concedeixen a beneficiaris situats en espais protegits amb reconeixement de les administracions, com són els de Xarxa Natura 2000 i els espais considerats així per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental. Igualment es destinen fons a iniciatives en espais inclosos en àmbits declarats com a patrimoni de la Unesco o reserva de la biosfera.